



**UNIVERSIDAD NACIONAL  
“PEDRO RUIZ GALLO”  
ESCUELA DE POSTGRADO**



**MAESTRIA EN DERECHO**

---

**“LAS RONDAS CAMPESINAS Y DELIMITACION DE SU  
COMPETENCIA MATERIAL EN CHOTA – CAJAMARCA”**

**TESIS**

**PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO DE  
MAESTRO EN DERECHO CON MENCIÓN EN  
CIENCIAS PENALES**

**AUTOR:**

**Bach. MÁXIMO EDQUEN CAMPOS**

**ASESOR:**

**DR. EZEQUIEL BAUDELIO CHAVARRY CORREA**

**LAMBAYEQUE - PERU**

**2018**

**APROBADO POR:**

.....

Dr. José María Balcázar Zelada

Presidente

.....

Dr. Amador Nicolás Mondoñedo Valle

Secretario

.....

Mg. Ricardo Ponte Durango

Vocal

**ASESOR**

.....

Dr. Ezequiel Baudelio Chavarry Correa

## **DEDICATORIA**

Al histórico pueblo de Chota, cuna de las rondas campesinas; a los fundadores de la organización y a todos los ronderos de Chota y de la región Cajamarca; deseando que la jurisdicción especial se fortalezca y contribuya para lograr un ambiente de paz y seguridad social en la zona rural y urbana.

## **AGRADECIMIENTO**

A mis padres, Segundo Víctor y María Leoniza quienes me dieron la vida; a mi esposa Liliana Núñez; a mis hijas: Janneth Marilyn y Deysi Elizabeth, quienes sacrificando sus prerrogativas familiares me indujeron su apoyo moral y espíritu de emprendimiento; a mis doce hermanos, quienes siempre estuvieron a la expectativa de mi formación académica.

Al doctor Ezequiel Chavarry Correa, asesor de esta investigación, quien siempre estuvo dispuesto a brindarme su orientación en forma personal y telefónicamente.

A los miembros de las rondas campesinas que me facilitaron actas de arreglos ronderos y otros documentos con información básica para cumplir mi objetivo de investigación.

## INDICE

<b>DEDICATORIA.....</b>	<b>iii</b>
<b>AGRADECIMIENTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>RESUMEN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>xi</b>
<b>CAPITULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA. ....</b>	<b>13</b>
<b>1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. ....</b>	<b>13</b>
<b>1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA.....</b>	<b>18</b>
<b>1.2. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO.....</b>	<b>18</b>
1.2.1 Justificación teórica .....	18
1.2.2. Justificación práctica .....	19
1.2.3. Justificación legal .....	19
1.2.4. Justificación doctrinaria.....	20
<b>1.3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. ....</b>	<b>21</b>
<b>1.4. OBJETIVOS .....</b>	<b>24</b>
1.4.1. Objetivo general.....	24
1.4.2. Objetivos específicos. ....	25
<b>1.5. HIPOTESIS. ....</b>	<b>25</b>
<b>1.6. VARIABLES. ....</b>	<b>25</b>
1.6.1. Variable independiente: .....	25
1.6.2. Variable dependiente: .....	25
<b>CAPITULO II: BASE TEÓRICA.....</b>	<b>25</b>
<b>2.1 LA JURISDICCION DE LAS RONDAS CAMPESINAS. ....</b>	<b>25</b>
2.1.1 Origen de las rondas campesinas. ....	26
2.1.2 Motivos que dieron origen a las rondas en Chota.....	27
2.1.3 Fundadores de las rondas campesinas.....	28
2.1.4 El día de las rondas campesinas.....	29
2.1.5 Organización y desarrollo de las rondas campesinas.....	30
2.1.6 Las rondas urbanas.....	31
2.1.7 Rondas campesinas y su participación en la política partidaria.....	33
2.1.8 Función que cumplen las rondas campesinas. ....	35
2.1.9 Mecanismos de la justicia en la jurisdicción de las rondas campesinas. ....	39
2.1.10 Competencia de las rondas campesinas. ....	42

2.1.11	Legislación que autoriza la jurisdicción de las rondas campesinas .....	43
2.1.12	Legislación que autoriza el derecho consuetudinario en el Perú .....	47
2.1.13	Justicia indígena.....	49
2.1.14	Elementos del derecho indígena .....	51
2.1.15	Coordinación entre la jurisdicción especial y la jurisdicción ordinaria.....	52
<b>2.2</b>	<b>LA JURISDICCION ORDINARIA. ....</b>	<b>56</b>
2.2.1	Poder Judicial.....	57
2.2.1.1	Órganos jurisdiccionales.....	58
2.2.1.2	Competencia de los Juzgados Penales. ....	60
2.2.1.3	Competencia de los Juzgados de Familia. ....	61
2.2.1.4	Competencia de los Juzgados de Paz Letrados.....	61
2.2.1.5	Jurisdicción y competencia del sistema penal. ....	63
2.2.1.6	Competencia de la justicia ordinaria.....	65
2.2.1.8	Determinación de la competencia penal. ....	65
2.2.1.9	Límites de la jurisdicción penal. ....	67
2.2.2	El Ministerio Público .....	67
2.2.2.1	Funciones del Ministerio Público. ....	68
2.2.3	Policía Nacional Del Perú.....	69
	<b>CAPITULO III: CONTROVERSIA ENTRE JURISDICCIÓN ESPECIAL Y LA JURISDICCIÓN ORDINARIA .....</b>	<b>73</b>
3.1.	Procesos judiciales. ....	73
3.2.	Informes periodísticos sobre las acciones de las rondas campesinas.....	84
3.3.	La jurisdicción especial y los derechos fundamentales.....	88
	<b>CAPITULO IV: MARCO METODOLOGICO .....</b>	<b>90</b>
4.1.	<b>MÉTODOS, TÉCNICAS, MATERIALES E INSTRUMENTOS .....</b>	<b>90</b>
4.1.1.	Métodos. ....	90
4.1.2.	Técnicas.....	92
4.1.3.	Instrumentos. ....	93
4.1.4.	Población y muestra.....	93
	<b>CAPITULO V: RESULTADOS .....</b>	<b>95</b>
5.1	<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS. ....</b>	<b>95</b>
	<b>CAPITULO VI: DISCUSION DE RESULTADOS.....</b>	<b>100</b>
	<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>120</b>
	<b>RECOMENDACIONES .....</b>	<b>121</b>
	<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>122</b>

## **RESUMEN**

Las rondas campesinas y delimitación de su competencia material en Chota- Cajamarca, es un trabajo de investigación sin precedentes científicos. Se tuvo como objetivo determinar las causas que generan conflictos entre los operadores de la jurisdicción ordinaria y los miembros de las rondas campesinas.

Para cumplir con el objetivo de la investigación se tomó como población a las rondas campesinas de los 19 distritos de la provincia de Chota- Cajamarca. Como muestra poblacional no probabilística se escogió a 95 ronderos (cinco de cada distrito), asistentes al XII congreso regional de rondas campesinas, los días 27 y 28 de enero 2018. Se encuestó a un grupo de ciudadanos (95) que no integran las rondas campesinas, encuesta realizada en la plaza de armas de la ciudad de Chota, el 30 de enero de 2018. Se analizó 33 procesos penales (archivo del investigador) seguidos contra los miembros de las rondas campesinas, en la provincia de Chota; cuyas sentencias condenatorias corresponden a los delitos de homicidio, secuestro y usurpación. Se examinó las actas de acuerdos de las rondas campesinas- periodo 2018 (archivo de la Federación provincial de rondas campesinas) y los informes periodísticos respecto a la actuación de las rondas campesinas, en Chota y provincias vecinas.

Cumplido el estudio de campo, se determinó que las rondas campesinas resuelven casos relacionados con todas las materias: civil, penal, familia, faltas y otros sin relevancia jurídica como la brujería, adulterio, etc. Los ronderos encuestados respondieron, en mayoría (74,7 %), que la no valoración de su trabajo por parte de la justicia ordinaria es una causa que genera conflictos entre las rondas campesinas y los operadores de justicia ordinaria. Los encuestados independientes -no integrados a las rondas campesinas- respondieron (73,7 %) que los conflictos se deben a la falta de delimitación de la competencia material en la jurisdicción especial. De estos últimos encuestados, el 95,8 % respondió que la delimitación de competencia

material de las rondas campesinas es necesaria para evitar conflictos entre las rondas campesinas y los operadores de la justicia ordinaria.

En conclusión, se ha logrado demostrar que la delimitación de la competencia material es necesaria para evitar los conflictos, entre la jurisdicción especial de las rondas campesinas y la jurisdicción ordinaria o estatal.

**PALABRAS CLAVE:** Rondas campesinas, jurisdicción especial, competencia material, delimitación de competencia



## **ABSTRACT**

The rondas campesinas and delimitation of their material competence in Chota-Cajamarca, is a research work without scientific precedents. The objective was to determine the causes that generate conflicts between the operators of the ordinary jurisdiction and the members of the peasant patrols.

In order to fulfill the objective of the investigation, the peasant patrols of the 19 districts of the province of Chota-Cajamarca were taken as a population. As a non-probabilistic population sample, 95 ronderos (five from each district), attending the XII regional congress of rondas campesinas, were chosen on January 27 and 28, 2018. A group of citizens (95) who do not integrate the rondas campesinas were surveyed, survey conducted in the parade ground of the city of Chota, on January 30, 2018. It analyzed 33 criminal proceedings (file of the investigator) followed against the members of the rondas campesinas, in the province of Chota; whose condemnatory sentences correspond to the crimes of homicide, kidnapping and usurpation. The minutes of agreements of the peasant patrols-period 2018 (archive of the provincial Federation of peasant patrols) and journalistic reports regarding the performance of the peasant patrols in Chota and neighboring provinces were examined.

Once the field study was completed, it was determined that the peasant patrols resolve cases related to all matters: civil, criminal, family, misdemeanors and others without legal significance such as witchcraft, adultery, etc. The ronderos surveyed responded, in a majority (74.7%), that the failure to assess their work by the ordinary courts is a cause that generates conflicts between peasant patrols and ordinary justice operators. The independent respondents -not integrated to the peasant patrols- responded (73.7%) that the conflicts are due to the lack of delimitation of the material jurisdiction in the special jurisdiction. Of these last respondents, 95.8% answered that the delimitation of material competence of the peasant patrols is necessary to avoid conflicts between peasant patrols and ordinary justice operators.

In conclusion, it has been demonstrated that the delimitation of material competence is necessary to avoid conflicts, between the special jurisdiction of the peasant patrols and the ordinary or state jurisdiction.

**KEY WORDS:** rondas campesinas<sup>1</sup>, special jurisdiction, material competence, delimitation of competence

---

<sup>1</sup> Social organization of peasants who live, work and look after the order in the rural zone

## INTRODUCCIÓN

La jurisdicción especial autorizada por la constitución política y la legislación que faculta este ejercicio jurisdiccional ha sido bien recibida por los apologistas del pluralismo jurídico; sin embargo, esta facultad jurisdiccional especial, resulta controvertida a la luz de los principios de autonomía y exclusividad jurisdiccional garantizados por el art. 139°, inciso 1) de la Constitución Política del Estado peruano.

La controversia se genera por los vacíos y ambigüedades que adolece la legislación, respecto de los sujetos, activos y pasivos, de la jurisdicción especial, particularmente respecto a las rondas campesinas. La falta de delimitación de competencia material deja abiertas las facultades jurisdiccionales de las rondas campesinas. Al no existir ley en contra, las rondas se declaran competentes para actuar sin límite y resolver todos los casos y materias, como así lo vienen haciendo en lo penal, civil, familia, administrativo, faltas e incluso respecto a conductas de carácter moral, como el adulterio, la brujería, chismes y otros que, en muchos casos resultan abusivos y, consecuentemente una controvertida actuación para la justicia ordinaria.

Se tiene como objetivo indagar respecto a las causas que generan los conflictos entre las rondas campesinas y la justicia ordinaria en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca. En forma particular se analiza, si la delimitación de la competencia material de la jurisdiccional especial de las rondas campesinas podría evitar los conflictos entre los miembros de las rondas campesinas y los operadores de la justicia ordinaria.

En el primer capítulo se analiza la realidad problemática, los antecedentes, su importancia y otros aspectos del tema de investigación. En la base teórica se trata sobre la jurisdicción especial de las rondas campesinas, las razones que motivaron su origen, los mecanismos de justicia y la competencia de la jurisdicción especial; la jurisdicción ordinaria, su jurisdicción y competencia (Poder Judicial, Ministerio Público, PNP) y el debido proceso en esta jurisdicción.

En el tercer capítulo se hace análisis de los aspectos controvertidos entre la justicia ordinaria y la jurisdicción especial: los procesos judiciales contra miembros de las rondas campesinas, reportes periodísticos que dan cuenta de la controvertida actuación de las rondas campesinas, en Chota y provincias vecinas. En capítulo seguido se consigna la metodología empleada para cumplir con el objetivo de investigación, los métodos, técnicas materiales e instrumentos; seguidamente se da a conocer los resultados de campo, su análisis y la respectiva discusión de los mismos. Se finaliza con las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos respectivos.

## **CAPITULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA.**

### **1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.**

Si bien, la constitución, la ley y la doctrina, autorizan la jurisdicción especial de las rondas campesinas; en la práctica, los operadores de la justicia ordinaria, cuestionan la actuación de los miembros de las rondas campesinas, situación que genera posiciones controvertidas entre las rondas y los operadores de la justicia ordinaria.

La situación conflictiva se evidencia en los procesos penales que la justicia ordinaria sigue contra los integrantes de las rondas, por los delitos de coacción, secuestro, daños, usurpación y otros que guardan relación con el ejercicio jurisdiccional del derecho consuetudinario. Frente a los procesos penales seguidos en su contra, los ronderos responden con movilizaciones de protesta e insultos contra los jueces, fiscales y otros operadores del derecho ordinario, quienes son tratados de corruptos y amenazados a cumplir cadena ronderil por las comunidades campesinas.

La controvertida relación entre la jurisdicción ordinaria y la especial de las rondas campesinas tiene causas diversas; sin embargo, una de las principales causas se origina en la disputa de competencia material, por cuanto las dos jurisdicciones operan en el mismo ámbito geográfico y también resuelven respecto a las mismas materias. Sumado a esta confusa competencia material, la justicia ordinaria no valora como medios probatorios las actas de acuerdos o esclarecimientos realizados en la jurisdicción de las rondas campesinas.

En la presente investigación se ha tomado algunos casos controvertidos donde, por un lado, intervienen las rondas campesinas de acuerdo a usos y costumbres, por otro lado, la justicia ordinaria cuestiona los mecanismos de justicia y la ilimitada facultad jurisdiccional de las rondas campesinas; más aún si, los operadores de la justicia ordinaria son presionados para resolver conforme a los requerimientos de las rondas campesinas.

Respecto a las actuaciones controvertidas de las rondas campesinas se tiene procesos judiciales sentenciados y otros en curso. También es frecuente encontrar titulares y reportes periodísticos en diarios regionales y nacionales, respecto al accionar de las rondas campesinas. Entre otros titulares de primera plana se tiene: *Condenan a 30 años de cárcel a dirigente de Rondas Campesinas*<sup>2</sup>. La nota informativa refería a la sentencia emitida contra el presidente de la Central Provincial de rondas campesinas de Chota, procesado y sentenciado a 30 años de cárcel por el delito de secuestro en agravio de dos ciudadanos del Centro poblado de La Púcara, distrito de Tacabamba, provincia de Chota.

Según se advierte en la carpeta fiscal No. 2014-97-0- el acusado, en su calidad de presidente de la Central Única de Rondas Campesinas de Chota, a través de su organización, secuestró a dos comuneros que, según versión del propio dirigente sentenciado, eran sospechosos de la muerte de una mujer, cuyo cadáver apareció en la periferia del Centro Poblado La Púcara del distrito de Tacabamba. La acusación fiscal refiera que los agraviados estuvieron secuestrados por el lapso de 15 días y durante ese periodo recibieron castigos degradantes, torturas, golpes físicos llegando al extremo de colgarlos de los testículos, todo ello bajo la orden del acusado-presidente provincial de rondas campesinas.

La acusación fue acogida por el Juzgado Supra provincial de Cajamarca, el cual falló condenando al acusado a 30 años de pena y el pago de S/. 5,000 de reparación civil<sup>3</sup>. Tras la apelación del sentenciado, la Sala Superior Mixta consideró que, el órgano de Primera Instancia ha materializado deficiencias en la motivación externa y dispuso un nuevo juicio oral con otro colegiado, mandato que fue cumplido con resultado similar al primer juicio.

---

<sup>2</sup> El diario La República ( 07 /06/2017)

<sup>3</sup> Exp. No. 155- 2014-87-0610-JR-PE-02

En el segundo Juicio, el dirigente rondero fue sentenciado a 30 años de pena privativa de libertad por el delito de secuestro y el pago de S/ 10,000 por concepto de reparación civil. La sentencia fue apelada por el sentenciado y a la fecha no se tiene sentencia de segunda instancia.

La Sala Superior de Apelaciones de la provincia de Chota, ha determinado que las rondas campesinas contravienen el ordenamiento jurídico vigente, evidenciándose su arbitrariedad pues en mérito al artículo 1° de la Ley No. 27908-Ley de rondas campesinas, este colectivo organizado de personas tiene como función colaborar en la solución de conflictos a través del mecanismo conciliatorio (extrajudicial). Ello, sin embargo, para concretarse exige el advenimiento voluntario de las partes en conflicto, no la imposición ni el activismo decisorio de las rondas campesinas. Esa ineludible exigencia en modo alguno se ve reflejada en el contenido del acta de fecha 26 de setiembre del 2013, haciendo patente más bien un proceder que desborda la facultad conferida por la Ley de Rondas Campesinas y además desnaturaliza la función que éstas cumplen<sup>4</sup>. En este caso analizado, la Sala Superior de Chota confirmó una sentencia por el delito contra el patrimonio en su modalidad de usurpación agravada, cuyo sentenciado resultó el presidente de rondas del distrito de Cochabamba – provincia de Chota. La Sala Superior fundamenta su decisión en el sentido que la función de las rondas campesinas es sólo conciliadora, precisando que la organización rondera estaría invadiendo la competencia de la jurisdicción ordinaria; agrega que el personal de las rondas campesinas no está capacitada para administrar justicia.

La controvertida posición de la justicia ordinaria no es aceptada por las rondas campesinas. Éstas aseguran que, tanto la constitución política, como la ley de rondas campesinas y el acuerdo plenario 1-2009 las otorgan facultades jurisdiccionales para resolver casos por homicidios, feminicidios, robos, violación sexual de menores y otros, sin limitación alguna.

---

<sup>4</sup> Sentencia de vista: Exp. 142-2015 – Sala superior de apelaciones Chota

En no pocos casos, los operadores de la justicia ordinaria que laboran en Chota, se ven obligados a atender los reclamos de las rondas campesinas y resolver conforme a los requerimientos de éstos. En la carpeta fiscal No. 155-2013, se dispuso la apertura de investigación por el delito de lesiones graves contra dos personas y lesiones leves en contra de otras dos, hecho ocurrido en el centro Poblado de La Pucara, distrito de Tacabamba. El antecedente del caso tenía que ver con una demanda por retracto de una parcela de terreno ante el Juzgado civil de Chota. Los retrayentes consideraban que tenían mejor derecho por la cercanía a su vivienda y, al advertir que el proceso no aceleraba como lo querían, decidieron ingresar a la fuerza y tomar posesión en el terreno materia de litis. Por su parte, los demandados -compradores iniciales- que hasta ese momento se encontraban en posesión decidieron armarse con palos y machetes y expulsaron violentamente a los usurpadores. El enfrentamiento dejó como saldo a cuatro personas heridas en diferentes partes del cuerpo, dos de ellas quedaron con las manos mutiladas.

No obstante, el inicio de las diligencias preliminares y los apercibimientos decretados por el Ministerio Público, los investigados no concurrieron a declarar para el esclarecimiento de los hechos delictivos. Las diligencias fiscales fueron frustradas por cuanto, las rondas campesinas, decidieron que el caso sea investigado y resuelto en la misma comunidad. Con ese objetivo retuvieron a los autores de las lesiones y los obligaron a cumplir trabajo comunal durante 30 días y el pago de los gastos de medicina y tratamiento médico a favor de los heridos. Cumplida la sanción y el pago respectivo, los ronderos se apersonaron ante el Ministerio Público y bajo amenaza de llevar al fiscal a rondar por las comunidades, le obligaron a archivar todo lo actuado. Pese a la gravedad de las lesiones, el fiscal a cargo de la investigación se vio obligado a sobreseer el caso, bajo el argumento de que los agraviados no habrían concurrido para ratificarse en su denuncia.



Caso aparte y muy emblemático result la participación de 80 ronderos de la provincia de Chota, en el “desalojo” realizado en la hacienda ganadera Yanacancha, del centro poblado del mismo nombre, distrito de La Encañada, provincia de Cajamarca, donde dejadas como saldo dos personas -los desalojados- muertas. La investigación del caso se realizó en la fiscalía provincial de encañada. Concluida la investigación preparatoria, el fiscal provincial acusó a 8 personas, entre ellas 5 ronderos de la provincia de Chota, por el delito de homicidio y solicita 35 años de cárcel para cada uno de los acusados.

La acusación<sup>5</sup> fiscal se sustenta en que ochenta ronderos de la provincia de Chota viajaron hasta la hacienda Yanacancha para desalojar a una pareja de esposos que se resistía a dejar la posesión de la referida hacienda, ello pese a que habían perdido el proceso civil y existía un mandato de desalojo sobre el inmueble. El colegiado supra provincial de Cajamarca acogió la acusación fiscal y emitió sentencia condenando a seis personas, con 35 años de pena privativa de la libertad y pago de un millón de soles de reparación civil a favor de la familia agraviada. Tanto, la Sala Superior de Cajamarca, como la Corte Suprema confirmaron la misma sentencia condenatoria y, en consecuencia se tiene un proceso en calidad de cosa juzgada. Entre los sentenciados el presidente provincial y otros integrantes de las rondas campesinas de la provincia de Chota.

En el artículo 18º, inciso 3) del Código procesal penal dispone que el Poder Judicial no podrá abocarse a los casos que refiere el art. 149º de la constitución política del Estado; es decir sobre casos resueltos en la jurisdicción especial de las comunidades indígenas. Al ser así, esta disposición procesal genera confusión de interpretación sobre el principio de exclusividad jurisdiccional garantizada en el art. 139º de la misma carta magna.

---

<sup>5</sup> Exp. 171-2012 – Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca

Por su lado, el acuerdo plenario No. 1-2009, del 13 de noviembre de 2009, autoriza explícitamente facultades jurisdiccionales a las rondas campesinas, entendiéndose que esta organización campesina está facultada para administrar justicia especial en el ámbito de su territorio y, al no existir ley en contra, las facultades jurisdiccionales no tienen límite en su competencia. Cabe resaltar que en muchos casos las funciones jurisdiccionales en cuestión se dan no sólo como un intento de reivindicar y afirmar sus propias esferas, sino que vienen propiciadas por la ausencia o casi nula existencia de presencia estatal<sup>6</sup>.

Cabe preguntarse ¿si todas las actuaciones de las rondas campesinas deben ser inimputables como se ha determinado en el fundamento 13 del acuerdo plenario No. 1-2009? ¿A caso, los hechos arriba expuestos no generan una reflexión y motivación para impulsar la delimitación y/o reglamentación de la jurisdicción especial de las rondas campesinas? ¿Los jueces supremos que autorizaron la jurisdicción especial de las rondas campesinas<sup>7</sup> conocen el controvertido resultado del acuerdo plenario?

## **1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA.**

¿Si delimitamos la competencia material de la jurisdicción especial de las rondas campesinas se evitará los conflictos entre la jurisdicción especial y la jurisdicción ordinaria, en Chota Cajamarca?

## **1.2. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO.**

### **1.2.1 Justificación teórica**

La investigación se realiza con el propósito de conocer la competencia y mecanismos de justicia de las rondas campesinas y, tras la investigación, aportar nuevos conocimientos sobre

---

<sup>6</sup> Fundamento 8- in fine. Acuerdo plenario 1-2009/CJ-116

<sup>7</sup> Acuerdo plenario 1-2009

esta jurisdicción especial, sus mecanismos de justicia, su competencia y otros aspectos relacionados con la organización de las rondas en Chota -Cajamarca.

Los resultados de esta investigación se sistematizarán en una propuesta para ser incorporados como conocimiento dentro del pluralismo jurídico y particularmente en la jurisdicción especial, cuyo objetivo final es evitar situaciones conflictivas entre las jurisdicciones que operan en Chota -Cajamarca.

### **1.2.2. Justificación práctica**

Esta investigación responde a la necesidad de evitar conflictos entre las rondas campesinas y los operadores de la justicia ordinaria. La propuesta sobre la delimitación de la competencia material de las rondas campesinas será uno de los criterios para mejorar el nivel de coordinación entre la jurisdicción especial y los operadores de la justicia ordinaria; por ende, evitar conflictos entre ambas jurisdicciones.

### **1.2.3. Justificación legal**

Tras esta investigación se obtiene importantes aportes para los juristas y legisladores, toda vez que se pondrá sobre sus escritorios, experiencias y casos concretos que no logran visualizarlos desde su lejana indiferencia. Los legisladores quedarán ilustrados sobre los vacíos legales y los conflictos que éstos generan entre las rondas campesinas y la justicia ordinaria.

Los conocimientos y experiencias que esta investigación aporta servirán como base para elaborar una real propuesta sobre la ley de coordinación, la misma que desde el año 1993 se encuentra dispuesta en la constitución política<sup>8</sup>. Se hace llegar sugerencias para que los legisladores y juristas, tomen las medidas legislativas a fin de evitar, en el futuro, los conflictos entre la jurisdicción ordinaria y la especial de las rondas Campesinas.

---

<sup>8</sup> artículo 149°

Se propone, asimismo, mejorar el art. 18° de Código Procesal Penal, debiendo determinar explícitamente en qué casos no podrá abocarse la justicia ordinaria y en cuáles no podrá intervenir la jurisdicción especial de las rondas campesinas. Sólo así, la justicia será predecible en cada una de las jurisdicciones, caso contrario seguirán las controvertidas actuaciones, más aún si, las rondas campesinas se abocan a resolver algunos casos que fueron resueltos o se encuentran en proceso en la jurisdicción ordinaria. En el mismo orden de ideas, la justicia ordinaria dedica tiempo inútil en largos procesos penales contra los dirigentes ronderos que se exceden en sus funciones jurisdiccionales, para finalmente absolverlos en su mayoría.

#### **1.2.4. Justificación doctrinaria.**

La investigación es importante por cuanto propone iniciativas para mejorar el acuerdo plenario No. 1-2009, el mismo que, si bien reconoce a la jurisdicción especial de las rondas campesinas y determina que los ronderos no cometen delito de secuestro u otros relacionados al ejercicio de su función jurisdiccional; también es cierto que erróneamente considera a los ronderos como si fueran integrantes de las comunidades indígenas y/o nativas, con los mismos usos y costumbres; constatación errada en todos sus extremos, si tenemos en cuenta que las ronda operan en la periferia de la ciudad, paralelamente a la jurisdicción ordinaria.

El antes referido plenario analiza teóricamente los diferentes aspectos y contexto en el cual debe actuar la jurisdicción especial; incluso se rechaza liminarmente la posibilidad de que las rondas campesinas cometan delito de secuestro, usurpación u otras<sup>9</sup>; sin embargo, el principio de la realidad demuestra que mientras no se produzca la delimitación de la competencia material, la controversia entre ambas jurisdicciones seguirá vigente.

---

<sup>9</sup> f. 13 del acuerdo plenario 1-2009.

### **1.3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.**

Es conveniente resaltar que no existen investigaciones que hayan tocado en forma específica la competencia de las rondas campesinas, menos aún sobre la delimitación de la competencia de esta jurisdicción especial.

El tema de las rondas campesinas, generalmente ha sido politizado y es por ello que, en las campañas electorales, es frecuente escuchar ofertas a favor de la jurisdicción de las rondas campesinas; ningún político habla de la posibilidad de regular o delimitar las facultades jurisdiccionales de la organización de rondas campesinas.

Idrogo (2008), afirma que las rondas campesinas resuelven todos los problemas de naturaleza civil y los de naturaleza penal, excepto los de homicidio y violación sexual, pues los delincuentes detenidos por las rondas son entregados a las autoridades de la Jurisdicción Ordinaria, previa movilización y mitin en la plaza principal de la ciudad.

El mismo autor afirma que, el conflicto entre el Poder Judicial y las rondas campesinas respecto a la Jurisdicción Especial es una de las consecuencias o efectos del reconocimiento estatal inadecuado de las rondas campesinas; a su vez éste se debe a la manera de pensar y actuar en función del monismo jurídico, el monopolio de la violencia estatal y la discriminación de las diferencias culturales.

Si bien el Art. 149° de la constitución peruana de 1993 les reconoce facultad jurisdiccional a las rondas campesinas; sin embargo, ello no significa que tienen facultades abiertas para abocarse al juzgamiento de delitos, faltas, cuestiones civiles y amparados en sus costumbres cometen abusos excesivos que en muchos casos ponen en grave peligro la integridad física y moral de las personas obligadas a someterse a su competencia. (Mozo, 2015, p.1- 2)

El Estado como único titular de la jurisdicción, también ha delegado esta función a favor de las rondas campesinas; sin embargo, no se le ha asignado competencias específicas, lo cual

lleva a confusión y por eso es que se vienen involucrando en conocer y/o someter a su jurisdicción casos que son de competencia exclusiva del Poder Judicial o del Ministerio Público; por lo que, se le debe, mediante ley establecer concretamente qué casos deben ser sometidos a su conocimiento y jurisdicción, lo que conllevará a evitar conflictos entre la jurisdicción ordinaria y las rondas campesinas. (Mozo, 2015, p. 27)

Bazán (2008) afirma que el tema de las competencias de la jurisdicción comunal es el que mayores debates produce a la fecha, por la existencia de posiciones doctrinales encontradas esencialmente en cuanto al rol de las rondas campesinas y el ejercicio de facultades jurisdiccionales, tales como los que sostienen que las rondas campesinas tendrían relativas facultades de colaboración en las funciones jurisdiccionales y policiales, los que planean que las rondas campesinas constituyen instancias informales de resolución de conflictos y quienes afirman que las rondas campesinas tienen y deben ejercer de manera plena funciones jurisdiccionales.

La coexistencia de dos sistemas de justicia implica que los jueces de paz actualmente suelen solicitar a las rondas campesinas que aplique disciplina a tal o cual delincuente que ellos han juzgado. Así, la ronda campesina sería ejecutor de las sanciones acordadas por el sistema formal de justicia. De esta manera el juez de paz habría buscado complementar su trabajo con las rondas, permitiendo que estas apliquen sanciones y realicen investigaciones, reservándose para sí la tarea de decidir los procesos judiciales. (Chillihuani, 2012, p.109)

Hurtado (2008) señala que, las rondas aplican una lógica restrictiva en los casos de robo, abigeato o daños mayores, obligando al infractor a pagar, reparar el daño y, cumplir con las sanciones como: trabajar en el día en obras comunales, rondar en la noche, ser castigado físicamente, pasar cadena ronderil y otros castigos que la asamblea apruebe.

Haciendo un análisis de lo antes dicho por los investigadores en comento, se advierte que las rondas campesinas administran justicia en las materias penal, civil, familia, faltas y otros casos de carácter moral como: brujería, infidelidad, mentiras, etc. En ese orden de ideas, llama la atención que los legisladores e investigadores del tema no se hayan preguntado: qué casos o materias quedan para ser resueltos en la jurisdicción ordinaria. Otra pregunta válida sería, cuál es el grado de entendimiento y/o coordinación entre las rondas campesinas y los operadores de justicia ordinaria? ¿Podrán operar dos jurisdicciones en el mismo ámbito geográfico sin que se interfieran en el ejercicio de sus facultades jurisdiccionales?

Intentando contestar estas interrogantes, (Yrigoyen 2002) afirma que: dentro del ámbito territorial propio (del pueblo indígena, comunidad o ronda), la jurisdicción especial tiene competencia para conocer todas las materias que juzgue conveniente, de acuerdo a su propio derecho y a su potestad normativa. Agrega que, ni la Constitución ni el Convenio 169 establecen límites en cuanto a las materias o la gravedad de hechos que puede conocer y resolver el derecho indígena y enfatiza que donde la ley no distingue, el intérprete no puede distinguir, recortar o reducir competencias.

Al referirse a las rondas campesinas, Yrigoyen (2002) afirma que: advirtiéndose los problemas de interpretación que existe en materia de rondas campesinas y su deficiente reconocimiento normativo, debería incluirse en la Constitución claramente el reconocimiento del ejercicio de funciones jurisdiccionales a las rondas campesinas por cuanto constituye la autoridad comunal del lugar, donde no hay comunidades campesinas o nativas.

Se advierte que, Yrigoyen ha realizado trabajos de investigación respecto a la jurisdicción de los pueblos indígenas y poco interés ha tomado por el estudio de los usos y costumbres de las rondas campesinas. Igual que otros investigadores, Yrigoyen identifica erróneamente la esencia conceptual de las rondas campesinas, como si fueran pueblos indígenas. Dicha

investigadora no ha tenido en cuenta que los escenarios donde se desarrollan y operan las rondas campesinas son diametralmente diferentes a los elementos culturales, históricos y geográficos, donde todavía sobreviven las comunidades indígenas; más aún si, los miembros de las rondas campesinas, comparten usos y costumbres con los operadores de la justicia ordinaria.

Las rondas campesinas nacieron en Cuyumalca y se desarrollaron en las zonas rurales (caseríos) de la periferia de la ciudad de Chota, cuyo escenario social es de corte mestizo, con usos y costumbres desarrollados a partir de la fundación española de la villa de Chota, año 1552 (Berrios. 1985); en consecuencia, resulta errada la inclusión de las rondas campesinas en la jurisdicción especial de las comunidades indígenas o nativas, donde las están intactas por ausencia del estado.

Algunos apologistas del derecho consuetudinario saludaron en su oportunidad el acuerdo plenario 1-2009; sin embargo, su desconocimiento de la realidad social y cultural de las rondas campesinas ha llevado una controvertida confusión. El acuerdo plenario desconoce que, las rondas campesinas no son dueñas de usos y costumbres ancestrales y/o indígenas; su organización nació el 29 de diciembre de 1976, en el caserío de Cuyumalca, hoy Centro Poblado del distrito y provincia de Chota, a ocho Km de la ciudad de Chota. Los ronderos “visten y calzan” como lo hace el juez, el fiscal, el abogado, el profesor, el ingeniero, el congresista, el ministro de estado, etc.

## **1.4. OBJETIVOS**

### **1.4.1. Objetivo general**

Determinar si la delimitación de competencia material de las rondas campesinas evitará conflictos entre esta jurisdicción especial y la jurisdicción ordinaria, en Chota Cajamarca.



#### **1.4.2. Objetivos específicos.**

- Determinar la competencia material de la jurisdicción especial de las rondas campesinas.
- Determinar los motivos que generan conflictos entre la jurisdicción especial de las rondas campesinas y la justicia ordinaria, en Chota Cajamarca.
- Determinar la percepción de la sociedad chotana, respecto de la competencia material de la jurisdicción especial de las rondas campesinas, en Chota Cajamarca.

#### **1.5. HIPOTESIS.**

Si se delimita la competencia material de las rondas campesinas se evitará conflictos entre esta jurisdicción especial y la jurisdicción ordinaria, en Chota Cajamarca.

#### **1.6. VARIABLES.**

##### **1.6.1. Variable independiente:**

La competencia material de las rondas campesinas.

##### **1.6.2. Variable dependiente:**

Conflictos entre la jurisdicción especial de las rondas campesinas y la jurisdicción ordinaria, en Chota Cajamarca.

## **CAPITULO II: BASE TEÓRICA**

### **2.1 LA JURISDICCION DE LAS RONDAS CAMPESINAS.**

El artículo 149° de la Constitución dispone que las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer funciones

jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona...

El reglamento de la ley de rondas campesinas – D. S. No. 025-2003-JUS- en su artículo 2°, define a las rondas campesinas, como las organizaciones sociales integradas por pobladores rurales, así como las integradas por miembros de las comunidades campesinas, dentro del ámbito rural. Son rondas comunales, las organizaciones sociales integradas por miembros de las comunidades nativas.

El acuerdo plenario No. 1-2009 (f - 8) ha determinado que, en la medida que la propia constitución afirma que, el derecho a la identidad étnica y cultural de las personas y el estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación, así como que el convenio (169-OIT) ratifica el derecho de los pueblos históricos a conservar sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, siendo el criterio fundamental la conciencia de su identidad (artículo 1°), entonces, atendiendo a que las Rondas Campesinas –según se tiene expuesto- son la expresión de una autoridad comunal y de sus valores culturales de las poblaciones donde actúan, será del caso entender –en vía de integración- que pueden ejercer funciones jurisdiccionales, cuyo reconocimiento efectivo, desde luego, estará condicionado al cumplimiento de un conjunto de elementos que luego se precisarán. No hacerlo importaría un trato discriminatorio incompatible con el derecho constitucional a la igualdad y a la no discriminación (Ruiz Molleda, 2008, p. 24).

### **2.1.1 Origen de las rondas campesinas.**

Las rondas campesinas nacieron en la comunidad de Cuyumalca, hoy centro poblado del mismo nombre, el 29 de diciembre de 1976. El objetivo inicial fue proteger los pocos bienes muebles de la Institución Educativa primaria 10386, ubicada en el mismo lugar, víctima de varios robos hasta ese momento. Convocados por el teniente gobernador, los padres de familia

y profesores de la institución, acordaron organizarse por turnos y rondar (vigilar desde el entorno) en horas de la noche para dar con la identidad de los ladrones que habían saqueado las carpetas y otros bienes de la institución. La primera noche de servicio de rondase cumplió el día 29 de diciembre.

Aunque los fundadores de la organización, es decir los que realizaron el primer día de servicio de ronda campesina, afirman que desde el primer día se pensó en el cuidado del ganado y otros bienes de la comunidad en general; a la luz de las indagaciones y los hechos cumplidos, las rondas campesinas focalizaron su trabajo inicial en el cuidado de los bienes de la Institución Educativa. El eficiente resultado motivó que esa iniciativa se extienda a lo largo de toda la comunidad y luego en las comunidades vecinas.

### **2.1.2 Motivos que dieron origen a las rondas en Chota.**

Como queda dicho, el objetivo inicial de las rondas fue cuidar los bienes de la institución educativa que se encontraba y, a la fecha, continúa en el mismo centro de la comunidad. La iniciativa cundió efecto positivo y, a las pocas semanas, el empleo de vigilancia se replicó en los sectores vecinos (hoy caseríos anexos al centro poblado de Cuyumalca).

Como es conocido por la Historia, la década de los años 70 se caracterizó por la crisis económica y social en todo el norte peruano. Chota no fue la excepción tuvo un periodo de crisis en todos los sectores, agudizándose particularmente en la agricultura y ganadería. Debido a la gran inestabilidad económica que se vivía en ese momento se desencadenó una serie de movilizaciones y reclamos sociales, en todo el Perú.

En Chota, la población también soportaba las peores consecuencias de la crisis nacional. Producto de la pobreza se gestaron bandas de ladrones que se organizaban en torno a un “cabecilla” que lideraba las acciones delictivas. Algunos ladrones se especializaron en escalar casas para llevarse las cosas, otros dedicados al abigeato dejaban en la desesperación a las

familias chotanas. Los comuneros se cuidaban por su propia cuenta, echaban llave a sus casas antes que se oscurezca la noche; para impedir su traslado “maneaban” con fuertes maneas de acero al ganado vacuno; por seguridad, todas las viviendas tenían sus corrales con buenas puertas y llaves donde eran encerrados los animales, para evitar el robo<sup>10</sup>.

Todas las noches de aquel tiempo era costumbre escuchar que los campesinos lloraban y gritaban como los mitayos (pastores de ganado): guauuuuuuuu!, ¡ayúdenme pue” taytitos!; poray pue” lo llevan a mis animales. Si los campesinos podían ayudar y no tenía miedo, de inmediato contestaban a las “guapiadas”.

El intercambio desigual de los productos de primera necesidad, la sequía y malas cosechas trajo consigo la ruina de la economía de las familias campesinas. La corrupción, incompetencia y hasta complicidad de las autoridades con la delincuencia prácticamente se institucionaliza. El ordenamiento jurídico y el desempeño de las autoridades prácticamente se habían puesto de espaldas a las necesidades de la población. Son problemas insostenibles que obligan a los campesinos la búsqueda de alternativas para intentar resolverlos por sus propios medios y participación directa. (Sánchez, 2015, p. 16)

Las rondas campesinas es la única organización campesina que rompió las toscas y oxidadas maneas de fierro, las cadenas, el estado de miedo, terror, muerte salvajismo, la podredumbre del Poder Judicial y la Policía, al crear un nuevo modelo de organización social y modelo de desarrollo desde Chota. (Gálvez et, al 2017)

### **2.1.3 Fundadores de las rondas campesinas**

Generalmente, se conoce como fundador de las rondas campesinas al señor José Régulo Oblitas Herrera; no obstante, esa consideración, a partir del año 2003 se reconoce como tales a grupo de valerosos ronderos que realizaron su turno de ronda el 29 de diciembre: José Régulo

---

<sup>10</sup> Radio Siglo 21- La voz del rondero 2017

Oblitas Herrera, José Isael Idrogo Marín, César Gilberto Benavides Mejía, Severino Oblitas Colunche, José Jesús Vásquez Gálvez, José Aladino Burga Huanambal, Lino Mejía Ruiz, Arturo Díaz Campos, José Santos Saldaña Gálvez y Artidoro Huanambal Guevara. Ocho de ellos se encuentran en vida y han aportado valiosa información para la presente la investigación.

Es conveniente recalcar que, el señor José Regulo Oblitas Herrera ha sido reconocido como el fundador de las rondas campesinas, por cuanto, en aquel momento, desempeñaba el cargo de teniente gobernador de Cuyumalca y como tal fue el encargado de coordinar con el subprefecto de ese entonces para organizar e impulsar las rondas campesinas en el lugar. Es a partir del año 2003, cuando el congreso de la república reconoce a los 10 fundadores con Resolución No. 11-2003-2004-P-CMHCRP, de fecha 03 de diciembre 2003. Se hace el reconocimiento y se otorga medalla de honor y del Congreso de la República del Perú, el grado de Caballero al grupo de ronderos fundadores de las rondas campesinas, nombrándolos a cada uno de los 10 ronderos que cumplieron su servicio de ronda el 29 de diciembre de 1976.

#### **2.1.4 El día de las rondas campesinas.**

Teniendo en consideración que, la primera noche de servicio de ronda se cumplió en Cuyumalca el día 29 de diciembre de 1976, en memoria a ese histórico hecho se estableció por ley, el día 29 de diciembre como el “día de las rondas campesinas” y se declaró al caserío de Cuyumalca del distrito y provincia de Chota, departamento de Cajamarca, como cuna y patrimonio histórico de las rondas campesinas del Perú<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Primera disposición final y transitoria- ley 27908

### **2.1.5 Organización y desarrollo de las rondas campesinas.**

Las rondas campesinas tuvieron su origen en el hoy centro poblado de Cuyumalca, donde los pobladores se vieron obligados a rondar durante las noches para evitar los continuos robos de los bienes muebles de la escuela primaria de ese caserío, hoy centro poblado de Cuyumalca.

El 29 de diciembre del año 1976 se realizó el primer grupo de rondas, conformado por 10 ciudadanos, bajo la dirección del teniente gobernador del lugar. A estas diez personas se les reconoce hoy como los fundadores de las rondas campesinas, al haber cumplido el servicio de ronda la primera noche, 29 de diciembre de ese año.

Una vez fundada las rondas campesinas y puestas en marcha su actividad, los fundadores coordinaron con las autoridades de los diferentes sectores de la comunidad. La idea fue bien recibida y la hicieron crecer en todos los caseríos del hoy centro poblado de Cuyumalca. Se organizaron en comités con su respectivo presidente y designaron grupos para el servicio nocturno, en cada uno de los sectores. Al ver los resultados positivos, el proyecto ronderil iba replicándose paulatinamente en todos los caseríos del distrito de Chota y en poco tiempo, el ejemplo cundió en todos los distritos de la provincia chotana.

La efectividad en el combate contra el abigeato hizo que las rondas campesinas se expandan en todo el ámbito de las provincias de Chota y Hualgayoc (1978), Cutervo (1980), Santa Cruz (1982). Hasta el año 1985, las rondas campesinas cubren el ámbito de todo el departamento de Cajamarca y parte de los departamentos de Lambayeque, Amazonas, San Martín y Tumbes. (Sánchez 2007. Pag. 46).

Dado el protagonismo de las rondas campesinas en las movilizaciones constantes lograron su reconocimiento estatal, en la primera ley de rondas campesinas promulgada el año 1986. La ley No. 24571, promulgada por el primer gobierno del partido aprista, dispuso en su artículo único: *reconózcase a las rondas campesinas pacíficas, democráticas y autónomas,...* Tiene

*además como objetivos, la defensa de sus tierras, cuidado de su ganado y demás bienes, cooperando con las autoridades en la eliminación de cualquier delito.*

Posteriormente, año 2003, se promulgó la actual ley de rondas campesinas No. 27908, en cuyo artículo 3° se dispone que: *las Rondas Campesinas están integradas por personas naturales denominadas ronderos y ronderas, que se encuentren debidamente acreditadas.*

#### **2.1.6 Las rondas urbanas.**

En diciembre del año 1976 nacieron las rondas campesinas en el hoy centro poblado de Cuyumalca. Su nacimiento se produjo en forma espontánea, sus fundadores no imaginaron que la organización llegaría a expandirse por todo el Perú y posteriormente a ser reconocida como persona jurídica, con jurisdicción especial.

Conforme pasaron los años las rondas campesinas se consolidaron en diferentes partes del País, la acción fue copiándose también en las ciudades; en algunos casos con la participación de los mismos ronderos que migraban de la zona rural a la ciudad; en otros casos, la envidiable seguridad que generaban las rondas campesinas hizo que los pobladores de la ciudad se organicen por barrios (sectores) y enfrenten la delincuencia en la ciudad.

Si se tiene como lugar de nacimiento de las rondas campesinas, el hoy centro poblado de Cuyumalca, lugar cercano a la ciudad de Chota, distrito capital de la provincia de Chota, se entiende que la referida organización con suma facilidad llegó a esta ciudad, donde hoy opera un comité central de rondas urbanas y, por su lado, diferentes sectores con su respectivo comité: Barrios Bajos, Ramón Castilla; Barrios Altos y Cruz de Motupe, el Calvario, entre otros. Cada grupo urbano de rondas hace patrullaje en su sector y cuando el caso lo amerita aplican los castigos físicos y métodos inquisitivos consuetudinarios que acostumbran las rondas campesinas.

Con el objetivo de adquirir mayor fuerza contra la delincuencia y cumplir sus fines de seguridad, en el campo y la ciudad, se han unido para trabajar en forma con junta, las rondas campesinas y urbanas. Cuando éstas acuden a sus reclamos frente a la justicia ordinaria, se presentan como rondas. Hacen su presentación diciendo: “somos la ronda”, dándose el caso que, al estar frente a un grupo, ningún funcionario está en condiciones de pedir identificación si se trata de las urbanas o rondas campesinas. En la práctica, ningún grupo de rondas se encuentra debidamente inscrito como su mismo reglamento lo dispone.

Cabe recalcar también que, por su lado, los dirigentes provinciales de las rondas campesinas tienen sus oficinas en la ciudad de Chota. En ese orden de ideas, resulta necesaria la delimitación de sus competencias jurisdiccionales, más aún si las rondas urbanas no se encuentran legalmente facultadas para ejercitar la justicia consuetudinaria.

Adicionalmente se debe tener en cuenta que el Juzgado Colegiado Supra provincial de Cajamarca se pronunció en el expediente No. 1666-2015-2-0601-JR-PE-02, sentenciando a los dirigentes de las rondas urbanas, recalcando que las rondas urbanas no tienen jurisdicción como la tienen las rondas campesinas.

Por su parte la Municipalidad Provincial de Cajamarca, mediante Ordenanza Municipal No. 229-CMPC, del 20 de noviembre de 2008, reconoció a las rondas urbanas de la provincia de Cajamarca, como una expresión de autonomía municipal en los asuntos de su competencia, en relación a la participación vecinal organizada y la resolución de conflictos como una potestad de administrar justicia que emana del pueblo. Por su parte el Ministerio Público de la localidad, recomendó a la Municipalidad de Cajamarca, modificar la mencionada ordenanza; recomendación que fue atendida por la Municipalidad, en la ordenanza No. 390-CMPC de fecha 27 de junio del 2012; en cuyo texto se dispone que las Rondas Urbanas, únicamente “colaborarán en la prevención y resguardo de la seguridad ciudadana”. “Sin embargo, las



rondas urbanas, en la realidad hacen mucho más que esto, constituyéndose en una justicia extraoficial”. (Romero Arteaga, 2015)

### **2.1.7 Rondas campesinas y su participación en la política partidaria.**

Las rondas campesinas nacieron durante el gobierno militar del presidente, Francisco Morales Bermúdez, en consecuencia, se recuerda un momento de crisis económica y política. “La necesidad de auto organizarse y enfrentar la crisis fue una iniciativa de las propias bases comunales, siendo una de ellas las rondas campesinas que protagonizaron un de los movimientos sociales y políticos más más importantes del norte del País” (Sánchez, 2007. Pág. 13).

La autonomía de las rondas campesinas duró muy poco, puesto que los políticos que se enrumbaron en la campaña electoral del año 1980 y 1985, muy rápido se infiltraron dentro de la organización campesina y aprovecharon para propiciar movilizaciones y reclamos frente a la crisis social y económica que se vivía en el momento. Coincidentemente, antes que se cumplirán dos años de la fundación de las rondas se instaló la asamblea constituyente (julio 1978) y como tal se proyectó las elecciones generales para el año 1980; en consecuencia, los políticos que hasta ese momento se encontraban frustrados en sus aspiraciones, encontraron campo de cultivo político en las bases ronderas. El APRA y la Izquierda Unida fueron los partidos que aprovecharon la oportunidad para infiltrarse dentro de la organización rondera.

En esas circunstancias salieron a la vista dos cabezas visibles, activistas de igual número de partidos políticos infiltrados dentro de las rondas campesinas. El aprista Pedro Risco Rodríguez se autodenominó presidente provincial de las “rondas pacíficas” de Chota, así lo consideraron sus seguidores; por otro lado, el izquierdista Segundo Daniel Idrogo Benavidez, dirigió la facción de izquierda, haciéndose calificar como el líder de las “rondas independientes” de la provincia de Chota.

Si bien, el aprista Risco Rodríguez, auto denominado presidente provincial de las rondas campesinas pacíficas, no participó en algún proceso electoral del momento, sí logró influir en la organización de rondas para impulsar la campaña del candidato aprista a la alcaldía provincial de Chota, en el año 1983 y, de igual manera, en el año 1985 encaminó la elección presidencial de Alan García. Mientras tanto, el izquierdista Idrogo Benavidez, aprovecho su influencia en la facción revolucionaria para encaminar un trabajo político personal, cuyo resultado fue su elección como diputado de la nación, en las elecciones generales de 1985. Una vez concluido su periodo de diputado se mantiene alejado de la provincia de Chota; al parecer, siente su deuda a la población electoral que le dio la oportunidad de ser parlamentario.

A partir de las elecciones municipales y generales de la década de los años noventa ha sido muy frecuente ver a los políticos infiltrados dentro de la organización de rondas campesinas; en muchos casos, los candidatos a alcaldías distritales y/o provinciales, incluyeron dentro de sus listas de regidores a los dirigentes ronderos. Por su parte, el ex alcalde provincial, Sánchez Arrascue quien permaneció 16 años en el cargo de alcalde provincial, se hizo reconocer como amigo de las rondas campesinas y como tal, llegó a manipular a la organización, captando a sus principales líderes para incluirlos como regidores. La década de los noventa del siglo pasado se puede considerar como el periodo de la destrucción de la organización rondera; por un lado, se sintió la manipulación del alcalde provincial y por el otro del gobierno central fujimorista que no dudó en utilizar los programas sociales para manipular a las rondas campesinas.

Entre los primeros dirigentes de las rondas campesinas que se involucraron en las redes de la política partidaria se encuentran: Nórtil Rafael Heredia y Oscar Sánchez Ruiz (como regidores), Segundo Daniel Idrogo Benavidez, elegido diputado de la Nación en el año 1985; mientras tanto, otros dirigentes de la izquierda han terminado como funcionarios del gobierno regional de Cajamarca. Por su parte, el actual gobernador regional, Porfirio Medina Vásquez,

ha desempeñado varios años como dirigente de las rondas campesinas en la provincia de Cutervo; el anterior gobernador regional, Gregorio Santos Guerrero, desempeñó en su oportunidad presidente regional de las rondas campesinas en la región Cajamarca. El director Subregional de Comercio Exterior y Turismo, Gerardo Agip Pérez, fue presidente de la Federación provincial de las rondas campesinas; el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chota, Hermitanio Idrogo Bustamante, fue integrante de las rondas campesinas. Actualmente, muchos integrantes de las rondas campesinas se encuentran desempeñando como funcionarios por elección popular y otros como personal de servicio: porteros, jardineros, seguridad personal de los funcionarios públicos, etc.

“Existen muchos ronderos corruptos, divisionistas y ayayeros que protegen a los funcionarios cuestionados por actos de corrupción” (Aníbal Mejía 2017)<sup>12</sup>. En este orden de ideas, si algo importante queda en la provincia de Chota, es el buen nombre ganado por las gloriosas rondas campesinas, como así lo llaman sus fundadores; pero, en la práctica, ya no existe o, si todavía existe en alguna zona rural, ésta se encuentra muy manipulada por la política partidaria.

### **2.1.8 Función que cumplen las rondas campesinas.**

Las rondas campesinas fueron fundadas en el hoy centro poblado de Cuyumalca, para resguardar los bienes de la Institución Educativa primaria No. 10386 de ese lugar, luego para auto protegerse de los ladrones que en aquella época habían proliferado en forma desmedida.

A decir de sus fundadores esta organización nació inspirada en la necesidad de cuidar los bienes de la escuela, sin pensarlo en que, con el correr del tiempo, sería una organización

---

<sup>12</sup> Voz de rondero –radio siglo 21 – 16/08/2017

histórica, hoy difundida a lo largo de todo el Perú y conocida a nivel del mundo. Sin haberlo proyectado en su inicio, hoy se cuenta con la jurisdicción especial de las rondas campesinas.

El artículo 149° de la constitución política de 1993, reconoció a las rondas campesinas y estableció que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, ejercen las funciones jurisdiccionales de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona.

El convenio 169 de la OIT, en su artículo 8°, 2); establece: dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que estén no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

La ley No. 22175, ley de comunidades nativas y desarrollo agrario de las regiones de selva, en su artículo 19° dispone que los conflictos y controversias de naturaleza civil de mínima cuantía que se originen entre los miembros de una comunidad nativa, así como las faltas que se cometan, serán resueltas o sancionadas en su caso, en forma definitiva por sus órganos de gobierno.

La ley No. 24571, promulgada en el primer gobierno del partido aprista, reconoció a las rondas campesinas pacíficas, democráticas y autónomas, cuyos integrantes están debidamente acreditados ante la autoridad política competente, como organización destinada al servicio de la comunidad y que contribuyen al desarrollo y a la paz social sin fines políticos partidarios. Tiene además como objetivos, la defensa de sus tierras, cuidado de su ganado y demás bienes, cooperando con las autoridades en la eliminación de cualquier delito.

La ley de rondas campesinas No. 27908, vigente actualmente, reconoce como persona Jurídica a las rondas campesinas, disponiendo que: apoyan en el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las Comunidades Campesinas y Nativas, colaboran en la solución de

conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la Ley, así como funciones relativas a la seguridad y a la paz comunal dentro de su ámbito territorial.

El acuerdo plenario No. 1-2009, del 13 de noviembre del año 2009, estableció que las rondas campesinas administran justicia en el ámbito de su jurisdicción. No obstante, las facultades jurisdiccionales otorgadas por el pleno, este acuerdo no delimita la competencia, entendiéndose que queda a libre disposición de los ronderos, vacío legal que en la práctica genera conflictos con la justicia ordinaria. En el mismo orden de ideas, ha determinado que los ronderos que actúan en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales no cometen delitos, por cuanto se fundamenta en que su accionar se encuentra justificado, por el afán de administrar justicia.

El reglamento de la ley de rondas campesinas – D. S. No. 025-2003-JUS, en su artículo 12° ha determinado las funciones de las rondas campesinas:

a) Contribuir a la defensa de la integridad física, moral y cultural de los miembros de la Comunidad Campesina, de la Comunidad Nativa, del Caserío u otro centro poblado, para mantener la paz y seguridad de la población, así como contribuir con el progreso de su pueblo.

b) Contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los miembros de la Comunidad Campesina, de la Comunidad Nativa, del Caserío u otro centro poblado al que pertenecen, de conformidad con la Constitución y las leyes.

c) Coordinar con las autoridades comunales en el ejercicio de las funciones que ejercen en uso de sus costumbres, respetando los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio OIT 169, la Constitución y las leyes.

d) Intervenir en la solución pacífica de los conflictos que se susciten entre los miembros de la comunidad y otros externos, siempre y cuando la controversia se origine en hechos ocurridos dentro de su ámbito comunal.

De conformidad con el art. 1° de la ley de rondas, No. 27908, las rondas colaboran en la solución de conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial conforme a la constitución y a la Ley, así como funciones relativas a la seguridad y a la paz comunal dentro de su ámbito territorial. Los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas se aplican a las Rondas Campesinas en lo que les corresponda y favorezca las rondas campesinas.

Es conveniente resaltar que, el tema de las rondas campesinas, siempre ha sido tratado políticamente, sobre todo en las campañas electorales. Algunos políticos tratan a los ronderos como aliados, otros los miran como un grupo peligroso. El régimen de Alberto Fujimori, consideraba un peligro el ejercicio de la función jurisdiccional autónoma, como ilustra la comunicación del viceministro del interior, Edgardo Solís Cano, al Vice Ministro de Justicia Hernán Ñopo con relación a la propuesta de AIDSESP<sup>13</sup> y las CORPIS<sup>14</sup> con relación al resto del derecho consuetudinario: conocemos el peligro que implica el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de Autoridades comunales y nativas, apoyados por Rondas Campesinas, sin embargo es factible concederle atribuciones para ciertos actos privados y algunas faltas leves codificadas en la ley<sup>15</sup>. Asunto administración de justicia indígena. Referencia Oficio No. 111-97-JUS-VM de 20 marzo)<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Asociación Interétnica de desarrollo de la selva

<sup>14</sup> Coordinaras regionales de los pueblos indígenas

<sup>15</sup> Ministerio del Interior oficio N0. 129-1997- IN-DVM/CA. Lima 02/4/1997

<sup>16</sup> Citado por PROJUR- 2008

Más allá de lo que disponen las leyes o la doctrina que autorizan y/o prohíben, las rondas campesinas, llevan como eslogan: “con leyes o sin leyes las rondas hacen justicia”. Con cuyo lema aluden a que la justicia ordinaria no debe interferir su actuación jurisdiccional.

#### **2.1.9 Mecanismos de la justicia en la jurisdicción de las rondas campesinas.**

Conocida una denuncia o incidente en la casa comunal, los ronderos se auto convocan para analizar el caso y darle solución. Para los casos que requieren atención urgente (robos, homicidios, violaciones,) se reúnen en el mismo día que conocen la denuncia. Los casos leves o no urgentes son tratados en la asamblea o reuniones ordinarias que cada fin de mes acostumbran realizar.

En la asamblea, sea ordinaria o extraordinaria se elige un comité de debates que tiene a su cargo el análisis y deliberación del problema denunciado. El presidente de debates da participación los asistentes y en caso que concurran representantes de otras comunidades se le otorga la participación a cada delegado. Luego del debate y respectivas conclusiones se emite la opinión sobre las medidas coercitivas o sanciones que se aplicará al culpable. (William Sánchez, 2018).

Los castigos que se aplica a los culpables, pasan desde lo más simple con los ejercicios físicos: gimnasia, ranas, planchas y otros. Entre las sanciones intermedias se encuentran, la cadena ronderil y el trabajo comunal. Las penas o sanciones drásticas se aplican con castigos físicos (latigazos), estos pueden ser aplicados en la misma comunidad donde se investiga el hecho delictivo o, también, si la gravedad del hecho lo amerita, en la plaza de armas de la ciudad, luego de pasearlo por las calles. En los casos de homicidio se embarga bienes, sobre todo ganado vacuno, de propiedad del homicida a fin de cubrir los gastos del funeral y otros. De estas “medidas cautelares” ejecutadas por los ronderos, aunque haya denuncias, no puede

pronunciarse la justicia ordinaria, toda vez que la acción resulta legitimada por el sector social que rechaza el acto homicida.

Entre las sanciones leves se tiene del ejercicio físico (planchas, ranas, caminar descalzo); los castigos más drásticos consisten en el azote con látigo confeccionado del miembro viril del toro, la cadena ronderil que obliga al investigado recorrer por las comunidades vecinas para trabajar durante el día y rondar en horas de la noche.

Si bien, los castigos inhumanos como los de sumergir a los investigados en una laguna de agua o hacerlos sentar sobre una petromax caliente, ya han dejado de ser comunes, como lo eran en las primeras décadas de actividad ronderil; en no muchos casos, los investigados o sus familiares denuncian que se les inyecta agujas o espinas por las unas, el pene u otras partes sensibles del cuerpo<sup>17</sup>.

Los apologistas de la organización rondera siempre manejan el argumento de que las rondas campesinas actúan conforme a los usos y costumbres; pero ello no es tan coherente con el principio de la realidad, por cuanto las rondas nacieron en el siglo XX, año 1976; siendo así, no estaríamos frente a las costumbres ancestrales o mecanismos del derecho consuetudinario.

Si el pluralismo jurídico se justifica por la existencia de dos o más sistemas jurídicos en un mismo espacio territorial, también implica diferentes culturas o diferenciación de culturas dentro del mismo ámbito territorial. Se entiende que dentro de ese territorio existirían grupos de diferente etnia y/o cultura, lo que no ocurre en Chota, donde los ciudadanos ronderos, por más alejados a la ciudad que se encuentren, no tienen las costumbres ancestrales que sí son características dentro las comunidades indígenas.

---

<sup>17</sup> Exp. 155-2014- Sala de apelaciones Chota



Si hacemos un parangón de los castigos aplicados dentro de las rondas campesinas con los existentes en el derecho inca, encontramos algunas coincidencias. Los incas castigaban afrentosamente al que no regaba o descuidaba sus tierras, los daban tres a cuatro golpes en la espalda o les azotaban los brazos y piernas con varas de mimbre, por holgazán. (Garcilaso de la Vega, 1945)

Es conveniente acotar que el proceso en la jurisdicción de las rondas es rápido, público y se ejecuta en forma inmediata. La denuncia se consigna en un cuaderno de denuncias y luego del debate, los acuerdos y sanciones decididos se anotan en el libro de actas. Para reparar el daño, cuando el caso lo amerita proceden a la incautación de bienes, sobre todo ganado vacuno del homicida (Willam Sánchez, 2018)<sup>18</sup>

Los encuestados aseguran que la justicia ronderil interviene en la solución de problemas delictivos como hurto, robo, abigeato, lesiones, usurpación, apropiación ilícita, obligación de dar suma de dinero. Al mismo tiempo aseguran que, entre las sanciones más comunes aplicadas por las rondas están, la cadena ronderil, el castigo físico y el trabajo comunal. Hay que tener en cuenta también que muchas veces, las rondas campesinas, en su actuar, esporádicamente cometen ciertos delitos, como tortura, lesiones y abuso de autoridad. (Gallardo, 2012-p. 178 - 179)

A decir de los miembros de las rondas campesinas los mecanismos de justicia en su jurisdicción especial no afectan los derechos fundamentales de los investigados; sin embargo, a la luz de la justicia ordinaria, los procedimientos y sanciones que aplican dentro de la jurisdicción especial de las rondas campesinas son abiertamente incompatibles con los derechos fundamentales; tampoco se admite el derecho de defensa técnica o de abogado, por cuanto existe la creencia que los letrados apoyan a los delincuentes.

---

<sup>18</sup> La voz del rondero – radio siglo 21 – 11/05/2018

Por su parte los propios miembros de las rondas campesinas reconocen que existen excesos en la aplicación de sus métodos correctivos, asegurando que en el poder Judicial también se cometen iguales o peores exceso. No se advierte intención de cambio en sus procedimientos de justicia; siempre alegan que actúan conforme al derecho consuetudinario.

#### **2.1.10 Competencia de las rondas campesinas.**

La competencia material de las rondas campesinas no ha sido delimitada, es por ello que en la actualidad se abocan a conocer y resolver conflictos en todas las materias: civil, penal, familia, faltas, incluso sancionan conductas no tipificadas como delitos, por ejemplo, la mentira, infidelidad, el chisme, la brujería, etc.

El único límite que dispone la constitución y la ley para la jurisdicción especial de las rondas campesinas es respeto de los derechos fundamentales:

Yrigoyen (2002) afirma que dentro del ámbito territorial propio (del pueblo indígena, comunidad o ronda), la jurisdicción especial tiene competencia para conocer todas las materias que juzgue conveniente, de acuerdo a su propio derecho y a su potestad normativa. Si la norma constitucional ni la ley establecen límites sobre la competencia material, ello significa que su competencia es abierta, pueden abocarse a la materia penal, civil, familia, etc, el único límite es que no violen derechos fundamentales de la persona. Pero, el criterio que deja abierta la competencia de las rondas campesinas resulta controvertido, pues en muchos casos se evidencia la arbitrariedad de los ronderos, sin que la justicia ordinaria pueda frenar los excesos.

El acuerdo plenario No. 1-2009 determinó que las rondas campesinas gozan de facultades jurisdiccionales en el ámbito de su territorio; sin embargo, erróneamente se ha considerado a las rondas campesinas como si fueran comunidades indígenas y/o nativas. No se ha tenido en cuenta que, los integrantes de las rondas campesinas son ciudadanos civilizados, hablan el idioma español, llevan los usos y costumbres de los pobladores residentes en la ciudad.

Comentario aparte merece la participación de los ronderos en política partidaria y desempeño de cargos públicos como funcionarios y/o servidores en la administración pública.

Cabe precisar que las rondas resuelven conflictos en materia civil, familia, penal y otras, incluso sobre los casos reñidos con la moral, como la infidelidad, la brujería, la mentira, los chismes, etc. Las rondas campesinas participan también en esclarecimiento de homicidios, violación de menores, lesiones leves y graves. Las rondas campesinas participan en decisiones administrativas, como el cambio de directores subregionales de salud, cambio de directores de instituciones educativas, etc.

La justicia ronderil es una alternativa real y efectiva para que la población chotana ejerza su derecho fundamental de acceso a la justicia y solucione sus problemas de relevancia penal como hurto, robo, abigeato, lesiones, usurpación, apropiación ilícita, obligación de dar suma de dinero. Entre las sanciones más comunes que aplican las rondas campesinas están, la cadena ronderil, el castigo físico y el trabajo comunal. (Gallardo, 2012, p. 177- 178)

#### **2.1.11 Legislación que autoriza la jurisdicción de las rondas campesinas**

En primer lugar, se tiene a la constitución política del año 1993, la misma que en el artículo 149° establece que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, ejercen las funciones jurisdiccionales de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.

La ley No. 22175, ley de comunidades nativas y de desarrollo agrario de las regiones de selva y ceja de selva; en su artículo 19° dispone: que los conflictos y controversias de naturaleza civil de mínima cuantía que se originen entre los miembros de una comunidad nativa, así como

las faltas que se cometan, serán resueltas o sancionadas en su caso, en forma definitiva por sus órganos de gobierno.

La primera ley que reconoce a las rondas campesinas como organización, No. 24571, promulgada el 07 de noviembre de 1986, dispone en su artículo único: Reconózcase a las Rondas Campesinas pacíficas, democráticas y autónomas, cuyos integrantes están debidamente acreditados ante la autoridad política competente, como organización destinada al servicio de la comunidad y que contribuyen al desarrollo y a la paz social sin fines políticos partidarios. Tiene además como objetivos, la defensa de sus tierras, cuidado de su ganado y demás bienes, cooperando con las autoridades en la eliminación de cualquier delito. Su estatuto y reglamento se rige por las normas de las comunidades campesinas que establecen la constitución y el código civil.

La ley de rondas campesinas No. 27908, vigente en la actualidad, reconoce personería Jurídica a las rondas campesinas, a la vez dispone que, apoyan el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las Comunidades Campesinas y Nativas, colaboran en la solución de conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la Ley, así como funciones relativas a la seguridad y a la paz comunal dentro de su ámbito territorial. Los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas se aplican a las Rondas Campesinas en lo que les corresponda y favorezca.

Por su parte, el acuerdo plenario No. 1-2009, del 13 de noviembre del año 2009, estableció que las rondas campesinas administran justicia en el ámbito de su jurisdicción. No obstante, las facultades jurisdiccionales otorgadas por el pleno, este acuerdo no precisa los límites de competencia, entendiéndose que queda a libre disposición de los ronderos, vacío legal que en la práctica genera conflictos con la justicia ordinaria. En el mismo orden de ideas, ha determinado que los ronderos que actúan en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales no

cometen delitos, por cuanto se fundamenta en que su accionar se encuentra justificado, por el afán de administrar justicia.

El Decreto Supremo N° 025-2003-JUS-Reglamento de la ley de rondas campesinas, en el artículo 13°, sobre la resolución de Conflictos, dispone que, la ronda campesina y ronda comunal, a base de las costumbres de la comunidad campesina, comunidad nativa, caserío u otro centro poblado al que pertenecen, pueden intervenir en la solución de conflictos que se susciten entre miembros de la comunidad u otros externos, dentro de su ámbito territorial, mediante actuaciones que serán registradas en el libro de ocurrencias que lleva para tal efecto, el mismo que será legalizado por el juez de paz de la jurisdicción correspondiente.

Los acuerdos adoptados deben respetar los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio OIT 169, la Constitución y las leyes. Son materias conciliables únicamente las relacionadas con la posesión, el usufructo de la propiedad comunal, bienes y el uso de los diversos recursos comunales.

En el acuerdo plenario No. 01-2009/CJ-116, muy bien recibido por las rondas campesinas y algunos sectores políticos, se advierte que, los magistrados de la Corte Suprema que aprobaron el referido acuerdo, desconocen la realidad social y cultural de las rondas campesinas; en todo caso, no les interesó discriminar los usos y costumbres y las manifiestas diferencias étnicas y culturales existentes entre rondas campesinas y comunidades indígenas o nativas.

Tras el análisis del acuerdo en comento se advierte que la jurisdicción especial de las rondas campesinas fue autorizada erróneamente, esto es sin haber determinado sus características propias que la hacen diferente de las comunidades indígenas o nativas<sup>19</sup>. El acuerdo (f-9), ha

---

<sup>19</sup> Jurisdicción donde no se cuenta con la presencia del estado y por lo mismo sus usos y costumbres aún son incivilizadas.

determinado que ante una imputación penal contra los integrantes de rondas campesinas por la presunta comisión de un hecho punible debe analizarse si resulta de aplicación el artículo 149° de la Constitución, es decir, si es de aplicación el denominado fuero especial comunal, en tanto en cuanto el reconocimiento de una jurisdicción especial constituye un límite objetivo a la jurisdicción penal ordinaria. Se agrega que se debe identificar los elementos: humano, orgánico, normativo y el elemento geográfico.

Se dispone asimismo que, estos elementos deben estar unidos al factor de congruencia. El derecho consuetudinario que deben aplicar las rondas campesinas no puede vulnerar los derechos fundamentales de la persona. Se trata de una condición de legitimidad y límite material para el ejercicio de la función jurisdiccional especial comunal-ronderil.

El elemento objetivo es básico al igual que el factor de congruencia, por lo que es del caso efectuar mayores precisiones. El primero, el elemento objetivo, está referido con independencia de lo personal: el agente debe ser un rondero y, en cuanto al territorial: la conducta juzgada ha de haber ocurrido en el ámbito geográfico de actuación de la respectiva ronda campesina, necesariamente presentes- a la calidad del sujeto o el objeto sobre los que recae la conducta delictiva (F-10)

La Constitución de 1993, en su artículo 89° establece que las comunidades campesinas y las nativas son personas jurídicas. En el artículo 134° del Código Civil se determina que las comunidades responden a un interés público, entendiéndose, el interés de los integrantes de dicha comunidad.

Las comunidades campesinas y nativas son definidas por el código civil como organizaciones tradicionales y estables de interés público, constituidas por personas naturales, cuyos fines se orientan al mejor aprovechamiento de su patrimonio, para beneficio general y equitativo de los comuneros, promoviendo su desarrollo integral y que están reguladas por una

legislación especial<sup>20</sup>. El artículo 135° del mismo código dispone que, para la existencia legal de las comunidades se requiere, además de la inscripción en el registro respectivo, su reconocimiento oficial.

### **2.1.12 Legislación que autoriza el derecho consuetudinario en el Perú**

La Constitución Política de 1993 (artículo 149°), reconoce al derecho consuetudinario, disponiendo que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona.

El Convenio 169 de la OIT, reconoce el derecho de los Pueblos Indígenas a asumir el control de sus propias instituciones, formas de vida y desarrollo económico y a fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los estados en que viven.

Ley de rondas campesinas No. 27908, reconoce personalidad jurídica a las rondas campesinas como organización comunal. Art. 1°, los derechos y deberes de sus miembros. Art. 3°, el derecho a la no discriminación. Art. 4°, el derecho de participación, control y fiscalización en los programas y proyectos de desarrollo que se implementen en su jurisdicción comunal. Art. 6°, la coordinación con autoridades y organizaciones sociales. Art. 8°, la coordinación y apoyo con autoridades jurisdiccionales.

Debe tenerse presente que, si bien se reconoce derechos y autonomía en su organización, en el artículo 8° de la ley de rondas campesinas se dispone que, para el ejercicio de sus funciones las rondas campesinas coordinan en el marco de la legislación nacional con las autoridades

---

<sup>20</sup>artículo 134°

políticas, policiales, municipales, representantes de la Defensoría del Pueblo y otras de la Administración Pública.

La ley No. 22175, ley de comunidades nativas y de desarrollo agrario de las regiones de selva y ceja de selva, artículo 19°, dispone que los conflictos y controversias de naturaleza civil de mínima cuantía que se originen entre los miembros de una comunidad nativa, así como las faltas que se cometan, serán resueltas o sancionadas en su caso, en forma definitiva por sus órganos de gobierno. En los procesos civiles y penales los tribunales comunes o privados, según sea el caso, tendrán en cuenta al resolver, las costumbres, tradiciones, creencias y valores socio-culturales de las comunidades.

La Comisión de la Verdad sostiene que, en materia del derecho al acceso a la justicia y el reconocimiento de los mecanismos tradicionales de justicia, para que la población indígena solucione sus conflictos con las reglas de su derecho consuetudinario se produjo a partir de la promulgación de la Ley No. 22175, en mes de mayo del año 1978.

Por su lado, la Ley No. 24656, Ley general de comunidades campesinas, en el año 1987, en el primer gobierno del partido aprista dispuso la obligación estatal para respetar y proteger los usos, costumbres y tradiciones de la Comunidad, propiciando el desarrollo de su identidad cultural y facultaba a su asamblea general para constituir rondas campesinas, conforme al literal k) del artículo 18° de la ley y según lo establecido en la Ley No. 24571.

Del análisis de la legislación que autoriza el ejercicio jurisdiccional de las rondas campesinas se advierte que éstas tienen facultades para organizarse y desarrollarse en el ámbito de su jurisdicción, pero a la vez tienen la obligación de coordinar con las autoridades de la administración pública, para el ejercicio de sus funciones, ello se evidencia en la última parte del art. 149° de la constitución, donde dispone una ley de coordinación, ley que pese al tiempo transcurrido no se ha producido.



Las comunidades campesinas y las nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior<sup>21</sup>.

El Pluralismo Jurídico hace referencia a la existencia de múltiples sistemas jurídicos en una misma área geográfica. Esta definición implica tres cosas: (i) reconocer que el derecho oficial, el derecho del estado, no es el único existente; (ii) que distintas prácticas jurídicas (i.e. justicia indígena, justicias comunitarias) pueden ser reconocidas como formas de derecho; (iii) lo anterior supone, por tanto, que el reconocimiento de soberanía que algunos estados establecen al pretender el monopolio de la fuerza jurídica, se relativiza.

Pluralismo Jurídico es la coexistencia de diversos conjuntos de normas jurídicas positivas en un plano de igualdad, respeto y coordinación, dentro de un mismo Estado (Machicado-2011). El Pluralismo Jurídico basado en la Teoría de la Institución afirma que el Estado no es el único centro productor de normas jurídicas sino también el producido por los grupos sociales diferentes al Estado, siempre y cuando: determinen sus fines propios, establezcan los medios para llegar a esos fines, distribuyan funciones específicas de los individuos que componen el grupo para que cada uno colabore, a través de los medios previstos, para el logro del fin y que tengan diferente cultura.(Bobbio, 2005)

### **2.1.13 Justicia indígena.**

La justicia Indígena es un conjunto de normas basadas en valores y principios culturales propios de las comunidades indígenas. Sus procedimientos y prácticas son propias que regulan la vida social en la comunidad y el territorio. Las reparaciones a las transgresiones a dichas

---

<sup>21</sup> Constitución, art. 89°

normas pueden ser por la vía de la recomposición, la compensación, y/o la remediación de los daños causados. Por su lado, el Convenio 169 y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, abrieron importantes espacios para la Justicia indígena.

En el derecho indígena se maneja el mecanismo de oralidad, mediante la transmisión vivencial de generación en generación. Las normas del derecho indígena aún sobreviven y algunas de ellas han sido combinadas con las normas del derecho liberal, en algunos casos asimilados y reformados. Sin embargo, otros preceptos se mantienen intactos, por ejemplo, la utilización de la ortiga en los niños, el látigo y las rampas de penco en los cuerpos de los adultos, y el baño de agua fría.

Entre las penas mayores estuvo el de pérdida de un miembro del reo; el trabajo en las minas del rey; el destierro a una isla o la cárcel perpetua. Las penas menores estaban constituidas por el destierro, la infamia, los azotes y la vergüenza pública sin distinción de edad o sexo (pasear al reo sobre un asno con capucha y dogal con indicación del delito cometido); el corte de la lengua, la confiscación de sus bienes y la multa. (Fernández Canelo, 2013)

A pesar del proceso de aculturización y transculturización a causa de la migración, muchos pueblos se resisten a este proceso y más bien se rigen por la vía de la interculturalidad, donde se articula muchos elementos, actos o normas del derecho indígena con el derecho positivo y viceversa por ser algunos coincidentes, compatibles y complementarios, como está ocurriendo con el caso de las rondas campesinas que pese a que sus miembros tienen una cultura mestiza se arrojan la condición de indígena para ejercer el derecho consuetudinario.

#### **2.1.14 Elementos del derecho indígena<sup>22</sup>**

La autoridad de los pueblos indígenas son los encargados de velar el bienestar, la tranquilidad y la paz social de la comunidad. Existe la autoridad unipersonal y pluripersonal. Dentro de una familia es el padre quien ejerce la autoridad e impone el castigo; entre otros casos, es el abuelo quien imparte la justicia. Entre los pueblos el presidente de la comunidad es el encargado de solucionar las alteraciones.

La autoridad pluripersonal actúa en conflictos mayores, son el cabildo y directivos superiores de la comunidad. Si la falta es grave, (homicidio) es la asamblea general el organismo superior encargado de proveer justicia.

No cualquier miembro de la comunidad puede ser autoridad indígena, es necesario residir en la comunidad, estar casado, por lo general son hombres, sin embargo, hoy en día las mujeres también ejercen esta función, ser personas respetadas, haber trabajado en la comunidad y tener experiencia fuera del mundo indígena para tramitar ayudas a la comunidad. Además debe ser honrado, respetado, y ser considerado como líder.

El derecho indígena cuenta con normas y preceptos que son aplicados a todos por igual sin preferencias, discriminación y resentimientos, algunas normas de conducta han sido modificadas en función de las demandas sociales, acordadas por la comunidad indígena.

Las sanciones se realizan de acuerdo a la falta cometida, es decir, desde consejos impartidos por los mayores, hasta la utilización del látigo y otros elementos. Todas estas normas correctivas buscan el equilibrio social reinante en la comunidad. Es necesario recalcar que en la justicia indígena no existe cárcel, los casos son solucionados en pocos días.

---

<sup>22</sup><http://www.monografias.com/trabajos/justicia-indigena/justicia>

Los principios en los cuales se fundamenta el Derecho Indígena se basan en la relación armónica de los miembros de una comunidad. Estos principios son:

Ama quella = no ser ocioso

Ama llulla = no mentir

Ama shua = no robar

Desde tiempos milenarios los pueblos y nacionalidades indígenas han ejercido prácticas y costumbres basadas en su derecho consuetudinario. La administración de justicia indígena forma parte de este derecho, teniendo sus propios, preceptos, objetivos, fundamentos características y principios.

#### **2.1.15 Coordinación entre la jurisdicción especial y la jurisdicción ordinaria.**

El artículo 149° de la constitución política del Perú de 1993, establece textualmente que: Las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de las personas. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial. En este orden de ideas, debe tenerse presente que existe mandato para que el legislador desarrolle una ley de coordinación entre la jurisdicción especial y la ordinaria, involucrando a la justicia de paz.

En el año 1994, el Perú ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, cuyo tratado reconoce en su artículo 8° el derecho de los pueblos indígenas a mantener sus costumbres e instituciones propias para resolver sus conflictos.

Han transcurrido cerca de 25 años desde la entrada en vigencia de la constitución política y aún no se ha logrado promulgar la ley de coordinación conforme al art. 149° in fine, sólo se cuenta con proyectos y buenas intenciones. A la fecha existen cerca de 10 proyectos de ley sobre coordinación de las rondas campesinas y al parecer no hay un interés por resolver ese vacío que es aprovechado por muchos políticos en campañas electorales. Cuando éstos visitan la provincia de Chota, ofrecen mejorar la legislación con ventajas para los miembros de las rondas. Ningún político se atreve a proponer una delimitación clara y precisa sobre la competencia de la jurisdicción especial u otro criterio de coordinación; ello debido a que la demagogia les resulta más rentable electoralmente. Claro está que, mientras exista esa omisión legislativa tendremos los problemas que generan una relación controvertida entre ambas jurisdicciones, la especial y la ordinaria.

En los últimos años se ha producido algunos intentos de coordinación entre ambos sistemas de justicia, como es el caso de algunos convenios y reuniones entre las rondas campesinas y operadores de la justicia ordinaria<sup>23</sup>; pero esa intención ha quedado en el papel; los conflictos persisten, sobre todo, cuando los ronderos resultan involucrados en procesos penales, sindicados por usurpación de funciones, daños, coacción, secuestro, etc.

Un hecho, grabado en la historia y en la mente de las rondas campesinas y, sobre todo en el recuerdo de las comunidades indígenas, es el denominado baguazo; es decir, el enfrentamiento entre la Policía Nacional, con las comunidades nativas y las rondas campesinas, en el lugar denominado la Curva del Diablo, provincia de Bagua, en el año 2009. En ese trágico hecho murieron varios policías y muchos miembros de las comunidades nativas y de las rondas campesinas, quienes en su intento de defender la intangibilidad de su territorio se opusieron a

---

<sup>23</sup> Poder Judicial, Ministerio Público y la Policía Nacional

los proyectos de extracción minera en la Amazonía. Su reclamo tenía asidero legal, pues el gobierno de turno no había cumplido con la ley de consulta previa.

En el baguazo se evidenció que los gobernantes de turno se interesaron por los temas de la política nacional; los intereses particulares o comunales quedaron de lado, aunque eso signifique violar la legislación o la el derecho a la consulta previa.

Como gesto de reivindicación de la jurisdicción especial se puede considerar el Acuerdo Plenario No. 1-2009 que estableció, como doctrina jurisprudencial<sup>24</sup>, que cuando las rondas campesinas y las comunidades nativas resolvieran conflictos, conforme lo establece el artículo 149° de la constitución, éstas no cometerían delitos. La aprobación de este acuerdo jurisprudencial por parte de los vocales supremos (hoy jueces), estableció un cambio de visión, entre lo que hasta ese momento había sido el principal punto controvertido; es decir, si las rondas campesinas tenían o no facultades jurisdiccionales como lo refiere la Constitución del año 1993.

A partir del acuerdo plenario del año 2009 se zanjó teóricamente la controversia entre las rondas campesinas y la justicia ordinaria; sin embargo, en la práctica, sigue igual, no existe esa coordinación o entendimiento cabal entre los operadores de estas dos jurisdicciones; más aún, si el referido plenario dispone que las rondas campesinas tienen jurisdicción en todo el ámbito de su territorio. Siendo así, se entiende que no tendría razón la existencia de la jurisdicción ordinaria en la provincia de Chota, donde fueron fundadas las rondas campesinas.

Cabe recalcar que el proyecto de ley sobre el desarrollo legislativo del artículo constitucional 149°, es decir, sobre coordinación entre jurisdicción ordinaria y la jurisdicción de las rondas campesinas es urgente, pues deberá reglamentar la justicia consuetudinaria, previa

---

<sup>24</sup>Vinculante para todos los jueces de la República

diferenciación de las condiciones culturales y/o geográficas de las rondas campesinas frente a los usos y costumbres de las comunidades nativas o indígenas.

La Ley de Rondas Campesinas No. 27908 dispone que (art. 8°) las rondas campesinas coordinan en el marco de la legislación nacional con las autoridades políticas, policiales, municipales, representantes de la Defensoría del Pueblo y otras de la Administración Pública. En el mismo orden de ideas en el artículo 9° ha determinado que Las autoridades de la jurisdicción ordinaria establecerán relaciones de coordinación con los dirigentes de las rondas campesinas respetando las autonomías institucionales propias.

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha dado muestras de respeto por el derecho consuetudinario que ejercen las comunidades campesinas, recomendando siempre que su actuación debe limitarse al respeto de los derechos fundamentales. En ese sentido, este Tribunal estima que la Comunidad Campesina de Montevideo debe otorgar la oportunidad a las personas involucradas de presentar sus argumentos de defensa por los hechos imputados (...) Del mismo modo, el Tribunal considera que, en la medida de lo posible, las eventuales sanciones a aplicar se encuentren tipificadas en el Estatuto de la Comunidad (en caso este ya hubiera sido aprobado, pues era, al momento de los hechos, aun en tema pendiente en la agenda) o que se fundamente si es que las mismas se basan en el derecho consuetudinario, pues ello permitirá garantizar, en mayor medida, su derecho a la defensa<sup>25</sup>.

El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a asumir el control de sus propias instituciones, formas de vida y desarrollo económico y a fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los estados en que viven.

---

<sup>25</sup> F- 88 EXP. 02765-2014 PA/TC

La Decisión 391, sobre el Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos (1996). En su art. 7° dispone que los países miembros, de conformidad con esta Decisión y su legislación nacional complementaria, reconocen y valoran los derechos y la facultad de decidir para las comunidades indígenas, afroamericanas y locales, sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados a los recursos genéticos y sus productos derivados.

Si bien, la constitución política, la ley de rondas campesinas y, el acuerdo plenario No.1-2009, reconocen en forma genérica, las funciones y derechos jurisdiccionales a las rondas campesinas en materia de justicia consuetudinaria<sup>26</sup>; ello no es suficiente, por cuanto existen imprecisiones para la coordinación con la justicia ordinaria. La controvertida relación entre jurisdicciones persistirá mientras existan vacíos y omisiones legales y/o constitucionales; más aún, si la misma constitución en su artículo 139° dispone la exclusividad jurisdiccional a favor de la justicia ordinaria.

## **2.2 LA JURISDICCION ORDINARIA.**

La Constitución Política del Perú en su artículo 138°, señala que La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, con arreglo a la Constitución y a las Leyes.

En la misma carta magna del año 1993 se ha determinado que, la potestad exclusiva de administrar justicia la tiene el Poder Judicial. Este es uno de los principios generales que se cita en el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se precisa que, No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral.

---

<sup>26</sup>El acuerdo plenario No. 1-2009 reconoce la jurisdicción especial de las rondas campesinas.



La Función Jurisdiccional, alude a la potestad que tienen los jueces de administrar justicia, resolviendo conflictos, declarando derechos y ordenando que se cumplan sus decisiones.

Eduardo Couture (1978) afirma: la función jurisdiccional, es la actividad pública realizada por órganos competentes nacionales o internacionales con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se aplica el orden jurídico establecido para dirimir conflictos y controversias, mediante decisiones susceptibles de adquirir autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución.

La justicia ordinaria proviene de la soberanía del estado, cuando administra justicia o resuelve las disputas o controversias que surgen dentro del estado. La potestad la ejerce a través de los tribunales de justicia integrados por jueces con autonomía e independencia en sus decisiones.

### **2.2.1 Poder Judicial<sup>27</sup>**

La jurisdicción ordinaria, conocida también como fuero común es ejercida por el Poder Judicial, conforme lo dispone la ley Orgánica de este Poder del Estado. El artículo 139° de la Constitución dispone los principios y derechos de la función jurisdiccional: 1) La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. 2) La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución.

---

<sup>27</sup>De conformidad a la ley orgánica del Poder Judicial

La Constitución Política en el artículo 138°, señala: La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, con arreglo a la Constitución y a las Leyes. En consecuencia, por mandato de la constitución, no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente o separada del Poder Judicial con excepción de la militar y la arbitral. No están permitidos procesos judiciales por comisión o delegación. El Poder Judicial, de acuerdo a la constitución y la ley orgánica, es el único organismo encargado de administrar justicia a través de sus órganos jurisdiccionales, sus diferentes instancias: Salas Supremas, Salas Superiores, Juzgados especializados, juzgado de paz.

Si lo antes referido fuera así, no hay forma para explicar con precisión la presencia de dos jurisdicciones (especial y ordinaria) en la provincia de Chota, ámbito en que se viene realizando la presente investigación. La controversia aumenta si al frente tenemos el artículo 149° de la misma constitución política que en forma por demás ambigua autoriza facultades jurisdiccionales a las comunidades indígenas y/o nativas, agregando “con el apoyo de las rondas campesinas”.

#### **2.2.1.1 Órganos jurisdiccionales.**

De conformidad a la Ley Orgánica del Poder Judicial tenemos los siguientes órganos jurisdiccionales:

- La Sala Penal de la Corte Suprema.
- Las Salas Penales de las Cortes Superiores.
- Los Juzgados especializados o mixtos.
- Juzgados colegiados (3 jueces) o unipersonales.
- Los Juzgados de la Investigación Preparatoria.

- Los Juzgados de Paz Letrados.

Son Juzgados Especializados, los siguientes:

- Juzgados Civiles
- Juzgados Penales
- Juzgados laborales.
- Juzgados agrarios.
- Juzgados de Familia

En la provincia de Chota se cuenta actualmente con cuatro juzgados de investigación preparatoria, dos juzgados penales unipersonales, dos juzgados civiles (uno es transitorio), un juzgado de Paz Letrado y una Sala Mixta itinerante en las provincias de Santa Cruz, Hualgayoc y Chota. Hasta el mes de agosto de 2017, esta Sala superior de apelaciones funcionaba en la ciudad de Chota; a partir de ese mes, la referida Sala fue trasladada a la ciudad de Cajamarca. Desde allí resuelve los casos apelados en los juzgados penales de Chota, Santa Cruz, Hualgayoc, San Miguel, San Pablo, Cajamarca y demás provincias del sur del departamento de Cajamarca.

Hasta el año 2016, en Chota se encontraba instalado el juzgado Penal Colegiado y conforme a la materia de su competencia resolvía casos penales cuya pena es mayor a seis años y tenía jurisdicción para las provincias de Chota, Santa Cruz y Hualgayoc.

De conformidad al artículo 47° de la ley orgánica del Poder Judicial, en cada provincia del Perú se encuentra instalado como mínimo un Juzgado Especializado o en su defecto un Mixto. La competencia de estos juzgados es provincial, salvo disposición administrativa en contra, por causa justificada. En algunas provincias de mayor población u extensión geográfica existen varios juzgados enumerados del primero a más.

Los Juzgados Civiles conocen lo siguiente<sup>28</sup>:

- Asuntos en materia civil, que no sean de competencia de otros Juzgados Especializados
- Acciones de Amparo
- Asuntos que les corresponden a los Juzgados de Familia, de Trabajo y Agrario, en los lugares donde no existan éstos
- Asuntos civiles contra el Estado, en las sedes de los Distritos Judiciales
- En grado de apelación los asuntos de su competencia que resuelven los Juzgados de Paz Letrados

En Chota, se cuenta con dos juzgados especializados civiles. Uno de éstos es transitorio, instalado desde setiembre de 2018.; estos juzgados resuelven materia civil, constitucional, laboral, contencioso administrativo, familia. Según la estadística del año 2017, este juzgado tuvo a su cargo cerca de dos mil expedientes. La mayor carga procesal se encuentra referida a violencia familiar; sigue contencioso administrativo y laboral Este juzgados se encuentra colapsado por los constantes cambios de los trabajadores, sobre todo de los especialistas que apoyan directamente al juez.

#### **2.2.1.2 Competencia de los Juzgados Penales<sup>29</sup>.**

Los Juzgados Penales conocen:

- Los procesos penales de su competencia, con las facultades y los trámites señalados por ley
- Las acciones de hábeas corpus

---

<sup>28</sup> LOPJ artículo 49°

<sup>29</sup> LOPJ artículo 50°

- En grado de apelación, los asuntos de su competencia que resuelven los Juzgados de Paz Letrados

- Los demás asuntos que le corresponda conforme a ley.

En la provincia de Chota se cuenta actualmente con dos juzgados pernales unipersonales y cuatro juzgados de investigación preparatoria; dos se encuentran ubicados en los distritos chotanos de Tacabamba y Huambos.

### **2.2.1.3 Competencia de los Juzgados de Familia<sup>30</sup>.**

Los Juzgados de Familia conocen las pretensiones relativas a las disposiciones generales del Derecho de Familia y a la sociedad conyugal, contenidas en las Secciones Primera y Segunda del Libro III del código civil y en el Capítulo X del Título I del Libro Tercero del Código de los Niños y Adolescentes.

Los casos de familia y adolescentes los resuelve el juzgado civil en Chota, capital de la provincia del mismo nombre.

### **2.2.1.4 Competencia de los Juzgados de Paz Letrados<sup>31</sup>**

Los Juzgados de Paz Letrados conocen casos en:

#### **a) Materia civil:**

- Las acciones derivadas de actos o contratos civiles o comerciales, inclusive las acciones interdictales, posesorias o de propiedad de bienes muebles o inmuebles, siempre que estén dentro de la cuantía señalada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

---

<sup>30</sup> LOPJ artículo 53°

<sup>31</sup> LOPJ artículo 57°

- Las acciones de desahucio y de aviso de despedida conforme a la cuantía que establece el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
- Los procedimientos de jurisdicción voluntaria que establezca la Ley, diligencias preparatorias y legalización de libros contables y otros.
- Las acciones relativas al Derecho Alimentario, con la cuantía y los requisitos señalados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
- Las tercerías excluyentes de propiedad, derivadas de los procesos de su conocimiento. Si en éstas no se dispone el levantamiento del embargo, el Juez de Paz Letrado remite lo actuado al Juez Especializado que corresponda, para la continuación del trámite.
- En los otros casos levanta el embargo, dando por terminada la tercería:
- Los asuntos relativos a indemnizaciones derivadas de accidentes de tránsito, siempre que estén dentro de la cuantía que establece el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
- Los procesos ejecutivos hasta la cuantía que señale el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
- Las acciones de filiación extramatrimonial previstas en el artículo 402°- inciso 6) del Código Civil.

**b) Materia Penal:**

1. Los procesos por faltas, expidiendo fallo apelable ante el Juez Penal o Juez de apelación.

**c) Materia de familia:**

- Las acciones relativas al derecho alimentario y el ofrecimiento de pago y consignación de alimentos, siempre que exista prueba indubitable del vínculo familiar y no estén acumuladas a otras pretensiones en la demanda; en caso contrario, son competentes los Juzgados de Familia.
- La oposición al matrimonio, de la confirmación del matrimonio anulable del impúber de la conformación y funcionamiento del consejo de familia para un incapaz, de acuerdo con las disposiciones del código civil, las que se tramitan en la vía procedimental que corresponda según su naturaleza.

**d) Funciones Notariales**

Los Juzgados de Paz Letrados, cuya sede se encuentra a más de diez kilómetros de distancia del lugar de residencia de un Notario Público, o donde por vacancia no lo hubiera, o en ausencia del Notario por más de quince días continuos, tienen además respecto de las personas, bienes y asuntos de su competencia, las siguientes funciones notariales:

- Escrituras Imperfectas.
- Protestos.
- Legalizaciones.

El Juzgado de Paz letrado de Chota es otro con mayor carga procesal en esta jurisdicción. La carga procesal del año 2017 se aproximó a los mil quinientos procesos. En alimentos y otros casos de familia se encuentra concentrada la mayor carga procesal.

**2.2.1.5 Jurisdicción y competencia del sistema penal.**

**a. Sala Penal Superior.**

- Conocer recursos de apelación contra autos y sentencias expedida por jueces penales.

- Dirimir contienda de competencia de jueces penales.
- Resolver los incidentes que se promuevan en su instancia.
- Dictar medidas limitativas de derechos.
- Conocer el recurso de queja.
- Resolver sus recusaciones.

**b. Juzgado Penal Colegiado.**

- Dirigir la etapa de juzgamiento.
- Resolver los incidentes que se promuevan durante el curso del juzgamiento.
- Solicitudes sobre refundición o acumulación de penas.

**c. Juzgado penal unipersonal.**

- Incidentes sobre beneficios penitenciarios.
- Recurso de apelación contra las sentencias del Juez de Paz Letrado.
- Recurso de queja.
- Dirime cuestiones de competencia entre los Jueces de Paz Letrados.

**d. Juzgado Penal de Investigación Preparatoria**

- Conocer las cuestiones derivadas de la constitución de las partes durante la Investigación Preparatoria.
- Imponer, modificar o hacer cesar las medidas limitativas de derechos durante la Investigación Preparatoria.
- Realizar la actuación de prueba anticipada.
- Conducir la Etapa Intermedia y la ejecución de la sentencia.
- Ser Juez de Garantía (contralor y tutela).
- De ser necesario, inscribir la defunción en el RENIEC.



#### **2.2.1.6 Competencia de la justicia ordinaria.**

La jurisdicción es considerada como el poder genérico de administrar justicia, dentro de los poderes y atribuciones de la soberanía del Estado; mientras tanto la competencia es precisamente el modo o manera como se ejerce esa jurisdicción por circunstancias concretas de materia, cuantía, grado, turno, territorio, etc.

La competencia es la capacidad o aptitud para ejercer la función jurisdiccional en determinados conflictos. La competencia fija los límites de la jurisdicción, se considera como un poder restringido o limitado según diversos criterios. Todos los jueces tienen jurisdicción, pero no tienen la misma competencia.

#### **2.2.1.7 Competencia de la justicia ordinaria en materia penal.**

De conformidad al artículo V del título preliminar del código procesal penal vigente (1) Corresponde al órgano jurisdiccional la dirección de la etapa intermedia y, especialmente, el juzgamiento, así como expedir las sentencias y demás resoluciones previstas en la Ley. En el mismo orden de ideas dispone en forma expresa que (2) Nadie puede ser sometido a pena o medida de seguridad sino por resolución del órgano jurisdiccional determinado por la Ley. En este extremo se reafirma la exclusividad jurisdiccional dispuesta en el art. 138° de la constitución política del estado; consecuentemente, cabe interrogarse si estas disposiciones son, o no, ¿incompatibles con la jurisdicción especial? ¿Qué coordinación podría haber entre jurisdicción ordinaria y la especial si, tanto en el título preliminar del código procesal penal, como en la constitución política se desconoce la existencia de otra jurisdicción?

#### **2.2.1.8 Determinación de la competencia penal.**

Conforme al 19° del código procesal penal la competencia (1) Es objetiva, funcional, territorial y por conexión (2) Por la competencia se precisa e identifica a los órganos jurisdiccionales que deben conocer un proceso.

#### **a. Competencia territorial**<sup>32</sup>

La competencia por razón del territorio se establece en el siguiente orden: (1) Por el lugar donde se cometió el hecho delictuoso o se realizó el último acto en caso de tentativa, o cesó la continuidad o la permanencia del delito. (2) Por el lugar donde se produjeron los efectos del delito. (3) Por el lugar donde se descubrieron las pruebas materiales del delito. (4) Por el lugar donde fue detenido el imputado. (5) Por el lugar donde domicilia el imputado.

Si la disposición legal procesal es expresa, cómo entender que los hechos delictivos y faltas producidas en el ámbito territorial de Chota, sean procesados en forma alternativa y a veces paralela, en la jurisdicción ordinaria y a la vez en el fuero de las rondas campesinas. No existe coherencia entre la norma y el principio de la realidad, máxime que las rondas aplican la justicia consuetudinaria y tras de ella entregan al culpable a la jurisdicción ordinaria para que se le procese conforme al derecho positivado. Al ser así, entonces cómo entender el principio constitucional ne bis in ídem.

#### **b. Competencia material y funcional**<sup>33</sup>

El código procesal penal (artículo 28º) dispone: (1) Los Juzgados Penales Colegiados, integrados por tres jueces, conocerán materialmente de los delitos que tengan señalados en la Ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayor de seis años. (2) Los Juzgados Penales Unipersonales conocerán materialmente de aquellos cuyo conocimiento no se atribuya a los Juzgados Penales Colegiados. (3) Compete funcionalmente a los Juzgados Penales, Unipersonales o Colegiados, lo siguiente: a) Dirigir la etapa de juzgamiento en los procesos que conforme Ley deban conocer; b) Resolver los incidentes que se promuevan durante el curso del juzgamiento; c) Conocer de los demás casos que este Código y las Leyes determinen. (4) Los Juzgados Penales Colegiados, funcionalmente, también conocerán de las solicitudes sobre

---

<sup>32</sup> artículo 21 CPP

<sup>33</sup> juzgados penales

refundición o acumulación de penas; (5) Los Juzgados Penales Unipersonales, funcionalmente, también conocerán: a) De los incidentes sobre beneficios penitenciarios, conforme a lo dispuesto en el Código de Ejecución Penal; b) Del recurso de apelación interpuesto contra las sentencias expedidas por el Juez de Paz Letrado; c) Del recurso de queja en los casos previstos por la Ley; d) De la dirimencia de las cuestiones de competencia entre los Jueces de Paz Letrados.

#### **2.2.1.9 Límites de la jurisdicción penal.**

- Art. 18° del código procesal penal vigente, dispone que la jurisdicción penal no es competente para conocer los siguientes:
  - Los delitos previstos en el artículo 173° de la constitución política (delitos de función cometidos por miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
  - Hechos punibles cometidos por adolescentes.
  - Los hechos punibles en los casos previstos en el artículo 149° de la constitución (casos relacionadas con las comunidades campesinas y nativas).

#### **2.2.2 El Ministerio Público**

Se denomina en forma indistinta, con tres denominaciones: Ministerio Fiscal (de origen español), la de Ministerio Público (francés) y la del Público Ministerio (italiano) de las cuales, el Perú, ha adoptado la segunda: Ministerio Público. A diferencia del Perú, Argentina, ha preferido la denominación del Ministerio Fiscal o Ministerio Público Fiscal.

La insignia del Ministerio Público está constituida por un varayoc, símbolo de autoridad, sostenido por dos manos; una balanza, que simboliza el equilibrio de la libertad con la paz; un sol ardiente que representa la justicia. En la parte superior se encuentran las normas fundamentales del incario: AMA SUA, AMA QUELLA, AMA LLULLA y, en la parte inferior se consigna: Ministerio Público. (Huanca Pacheco A. 2012).

El artículo 159° inciso 4) de la constitución política de 1993, dispone que, corresponde al Ministerio Público: conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. En este orden de ideas, el Ministerio Publico, tiene como finalidad principal velar por la adecuada administración de justicia en representación de la sociedad.

#### **2.2.2.1 Funciones del Ministerio Público.**

La Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo No. 52 del 19 de marzo de 1981, dispone que: El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos; la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública, la persecución del delito y la reparación civil cuando no existe actor civil.

En el inciso 1) del artículo 60° del código procesal penal vigente, sobre las funciones del Ministerio Público se ha determinado que, el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal; Actúa de oficio, a instancia de la víctima, por acción popular o por noticia policial. En el inciso 2) dispone que el Fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.

En el artículo 61° del CPP se determina las atribuciones y obligaciones del representante del Ministerio Público: 1) dispone que el Fiscal actúa en el proceso penal con independencia de criterio. Adecúa sus actos a un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por la Constitución y la Ley, sin perjuicio de las directivas o instrucciones de carácter general que emita la Fiscalía de la Nación; 2) Conduce la Investigación Preparatoria. Practicará u ordenará practicar los actos de investigación que correspondan, indagando no sólo las circunstancias que permitan

comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado. Solicitará al Juez las medidas que considere necesarias, cuando corresponda hacerlo; 3) Interviene permanentemente en todo el desarrollo del proceso. Tiene legitimación para interponer los recursos y medios de impugnación que la Ley establece.

Sobre la investigación del delito, el código procesal penal en su artículo 65°, dispone que:

1) El Ministerio Público, en la investigación del delito, deberá obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos, así como para identificar a los autores o partícipes en su comisión. 2) El Fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, realizará –si correspondiere- las primeras diligencias preliminares o dispondrá que las realice la Policía Nacional. 3) Cuando el Fiscal ordene la intervención policial, entre otras indicaciones, precisará su objeto y, de ser el caso, las formalidades específicas que deberán reunir los actos de investigación para garantizar su validez. La función de investigación de la Policía Nacional estará sujeta a la conducción del Fiscal. 4) Corresponde al Fiscal decidir la estrategia de investigación adecuada al caso. Garantizará el derecho de defensa del imputado y sus demás derechos fundamentales, así como la regularidad de las diligencias correspondientes

### **2.2.3 Policía Nacional Del Perú.**

El numeral 4 del artículo 159° de la constitución política del estado peruano señala que el Ministerio Público conduce desde su inicio la investigación del delito... agrega que la Policía nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. En el artículo 67° del código procesal penal dispone que la Policía Nacional en la función de investigación del delito, deben tomar conocimiento de los delitos por su propia iniciativa, con obligación de dar cuenta inmediata al Ministerio Público.

El artículo 166° de la carta magna dispone que, la Policía Nacional del Perú tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y

ayuda a las personas y garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia y controla las fronteras.

Toda intervención o actuación policial debe ser válidamente realizada, conforme a los presupuestos previstos en el código procesal penal 2004. De no cumplir el debido proceso desde el primer momento de la intervención policial las diligencias serán arbitrarias y consecuentemente sin valor probatorio. Si los miembros de la Policía Nacional realizan vigilancia domiciliaria injustificada o seguimiento a una persona por motivos ajenos al esclarecimiento de un hecho delictivo o, fundado en un requerimiento judicial, su acción estará comprendida en los supuestos proscritos por la Constitución y el ordenamiento jurídico legal<sup>34</sup>

El artículo 60° del código procesal penal vigente dispone que la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público. El art. 68° del mismo código señala las atribuciones de la Policía Nacional: a) Recibir las denuncias escritas o sentar el acta de las verbales, así como tomar declaraciones a los denunciantes; b) vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean borrados los vestigios y huellas del delito; c) practicar el registro de personas, así como prestar el auxilio que requieran las víctimas del delito; d) Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito, así como todo elemento material que pueda servir a la investigación; e) practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los autores y partícipes del delito. f) recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de los hechos; g) levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en video y demás operaciones técnicas o científicas. h) capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia, informándoles de inmediato sobre sus derechos; i) Asegurar los documentos privados que puedan servir a la investigación. En este caso, de ser posible en función a su cantidad, los pondrá rápidamente a disposición del Fiscal, para los fines

---

<sup>34</sup> Exp. N°6092-2005- HC, 29/08/05, S2, FJ. 5

consiguientes quien los remitirá para su examen al Juez de la investigación Preparatoria. j) Allanar locales de uso público o abiertos al público; k) efectuar, bajo inventario, los secuestros e incautaciones necesarios en los casos de delitos flagrantes o de peligro inminente de su perpetración. l) recibir la manifestación de los presuntos autores o partícipes de delitos, con presencia obligatoria de su abogado defensor. Si éste no se hallare presente, el interrogatorio se limitará a constatar la identidad de aquellos; m) reunir cuanta información adicional de urgencia permita la criminalística para ponerla a disposición del Fiscal, y n) Las demás diligencias y procedimientos de investigación necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos investigados.

El artículo 205° de la misma norma procesal dispone que: 1) La Policía, en el marco de sus funciones, sin necesidad del Fiscal o del Juez, podrá requerir la identificación de cualquier persona y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiere hecho el requerimiento, cuando considere que resulta necesario para prevenir un delito u obtener información útil para la averiguación de un hecho punible.

El intervenido tiene derecho a exigir al Policía le proporcione su identidad y la dependencia a la que está asignado; 2) La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio del correspondiente documento de identidad. Se deberá proporcionar al intervenido las facilidades necesarias para encontrarlo y exhibirlo. Si en ese acto se constata que su documentación está en orden, se le devolverá el documento y autorizará su alejamiento del lugar; 3) Si existiere fundado motivo que el intervenido pueda estar vinculado a la comisión de un hecho delictuoso, la Policía podrá registrarle sus vestimentas, equipaje o vehículo. De esta diligencia específica, en caso resulte positiva, se levantará un acta, indicándole lo encontrado, dando cuenta inmediatamente al Ministerio Público, 4) en caso no sea posible la exhibición del DNI, según la gravedad del hecho investigado o del ámbito de la operación policial practicada, se conducirá al intervenido a la dependencia policial más cercana para

exclusivos fines de identificación. Se podrá tomar las huellas digitales del intervenido y constatar si registra alguna requisitoria. Este procedimiento, contado desde el momento de la intervención policial, no puede exceder de cuatro horas, luego de las cuales se le permitirá retirarse. En esos casos, el intervenido no podrá ser ingresado a celdas o calabozos ni mantenido en contacto con personas detenidas, y tendrá derecho a comunicarse con un familiar o con la persona que indique. La persona deberá llevar, para estos casos un Libro-Registro en el que se harán constar las diligencias de identificación realizadas en las personas, así como los motivos y duración de las mismas, 5) siempre que sea necesario para las finalidades del juicio o para las finalidades del servicio de identificación, se pueden tomar fotografías del imputado, sin perjuicio de sus huellas digitales, incluso contra su voluntad -en cuyo caso se requiere la expresa orden del Ministerio Público-, y efectuar en él mediciones y medidas semejantes. De este hecho se levantará un acta.

En el mismo orden del razonamiento, el artículo 206° señala el procedimiento en los controles policiales públicos en delitos graves: 1) para el descubrimiento y ubicación siempre que sea necesario para las finalidades del juicio o para las finalidades del servicio de identificación, se pueden tomar fotografías del imputado, sin perjuicio de sus huellas digitales, incluso contra su voluntad -en cuyo caso se requiere la expresa orden del Ministerio Público-, y efectuar en él mediciones y medidas semejantes. De este hecho se levantará un acta; 2) la Policía abrirá un libro-registro de controles policiales públicos. El resultado de las diligencias con las actas correspondientes, se pondrá de inmediato en conocimiento del Ministerio Público.

En los casos que evidencie flagrancia, la Policía Nacional actuará conforme al artículo 259° del código procesal penal: 1) la Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito; 2) existe flagrancia cuando: la realización del hecho punible es actual y en esa circunstancia, el autor es descubierto o cuando: es perseguido y capturado inmediatamente después de haber realizado el acto punible, o cuando: es sorprendido con



objetos o huellas que revelan que acaba de ejecutarlo; 3) si se tratare de una falta o de un delito sancionado con una pena no mayor de dos años de pena privativa de privación de la libertad, luego de los interrogatorios de identificación y demás actos de investigación urgentes, puede ordenarse una medida menos restrictiva o su libertad.

El artículo 260° del CPP, dispone que toda persona podrá proceder al arresto (arresto ciudadano) en estado de flagrancia delictiva. En este caso debe proceder a entregar inmediatamente al arrestado y las cosas que constituyan el cuerpo del delito a la Policía más cercana. Se entiende por entrega inmediata el tiempo que demande el dirigirse a la dependencia policial más cercana o al Policía que se halle por inmediaciones del lugar. En ningún caso el arresto autoriza a encerrar o mantener privada de su libertad en un lugar público o privado hasta su entrega a la autoridad policial. La policía redactará un acta donde se hará la entrega y las demás circunstancias de la intervención.

### **CAPITULO III: CONTROVERSIA ENTRE JURISDICCIÓN ESPECIAL Y LA JURISDICCIÓN ORDINARIA<sup>35</sup>**

#### **3.1. Procesos judiciales.**

Los casos que han generado controversia entre la jurisdicción de las rondas campesinas y la justicia ordinaria son múltiples y en las diferentes materias, civil, penal, familia, administrativo, etc. Sin embargo, para la presente investigación se ha considerado como muestra no probabilística, los de mayor impacto social en el ámbito de la provincia de Chota. Algunos de estos casos han sido informados en los diferentes medios de comunicación local, regional y nacional y por ende han causado reproche social.

---

<sup>35</sup> Análisis de casos

- **Ronderos sentenciados por homicidio calificado**<sup>36</sup>

- En el mes de mayo de 2014 sorprendió a la población del ámbito regional la noticia que daba cuenta de la sentencia penal recaída contra el presidente provincial de rondas campesinas de la provincia de Chota. Uno de los titulares periodísticos decía: Condenan a 35 años de cárcel a ronderos asesinos de esposos Collantes Vizconde<sup>37</sup>

- La nota periodística refería que el Juzgado Penal Colegiado Supra provincial de la Corte Superior de Cajamarca condenó a 35 años de pena privativa de su libertad a 8 personas como autoras del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado y asesinato por alevosía en agravio de los esposos Collantes Vizconde. El diario regional resaltó el caso precisando que los dos primeros sentenciados son dirigentes de las rondas campesinas de la provincia de Chota.

Este caso se tornó en emblemático por la participación de 80 ronderos de la provincia de Chota, en el “desalojo” realizado en la hacienda ganadera Yanacancha, del centro poblado del mismo nombre, distrito de La Encañada, provincia de Cajamarca, donde dejaron como saldo dos personas muertas, los esposos Collantes Vizconde.

La acusación fiscal se sustenta en que ochenta ronderos de la provincia de Chota viajaron hasta la hacienda Yanacancha para desalojar a una pareja de esposos que se resistía a dejar la posesión de la referida hacienda, ello pese a que habían perdido el proceso civil y existía un mandato de desalojo sobre el inmueble. El Colegiado Supra Provincial de Cajamarca acogió la acusación fiscal y, conforme al expediente No. 171-2012, condenando a los acusados a 35 años de pena privativa de la libertad y el pago de un millón de soles de reparación civil a favor de la familia agraviada. Tanto, la Sala Superior de Cajamarca, en sentencia de segunda instancia, como la Corte Suprema- en casación- confirmaron la sentencia condenatoria y, en

---

<sup>36</sup> Expediente No. 171-2012- Sala Suprior -Cajamarca

<sup>37</sup> Diario Panorama Cajamarquino, 23/05/ 2014-,pág. 4

consecuencia, se tiene un proceso en calidad de cosa juzgada, entre cuyos sentenciados se encuentra el expresidente provincial de rondas campesinas de Chota y otros integrantes de la misma organización.

El hecho se remonta a inicios del año 2012, cuando un grupo de cerca de 80 ronderos de la provincia de Chota, incursionaron en su hacienda de Yanacancha Baja, provincia de Cajamarca, y los mataron a balazos. Según la sentencia, los ronderos habrían sido contratados para accionar y desalojar de la hacienda Yanacancha a los esposos Collantes Vizconde quienes se resistieron a salir de aquel inmueble, pese a que habían perdido en un proceso civil.

Conforme a la acusación fiscal se desprende que el sentenciado, presidente de la Central Provincial de rondas campesinas de Chota, en común acuerdo con otros ronderos habrían recibido dinero para contratar a un grupo de ronderos de la provincia de Chota y trasladarlos hasta el centro poblado de Yanacancha distrito de La Encañada, provincia de Cajamarca, donde tenían como objetivo desalojar a la familia Collantes Vizconde. El contrato lo hizo la sentenciada de apellido Rojas, quien se sentía con derecho a posesionar la hacienda Yanacancha y no la podía posesionarlo, debido a la resistencia y férrea oposición que ostentaban los esposos Collantes Vizconde.

En el texto de la sentencia se lee que, el día 04 de enero de 2012, los ronderos viajaron desde Chota hasta Yanacancha. Esa noche fueron atendidos con comida licor por parte de la persona que los contrató para “el desalojo”. Cuando era las 05 de la mañana aproximadamente del día 05 de enero incursionaron al domicilio objeto de desalojo. Encontraron a los dos esposos, aun descansando, como de costumbre se atrincheraron y dispararon con sus armas de largo alcance contra los miembros de las rondas campesinas. Ante la resistencia que ejerció la pareja de esposos, los ronderos dispararon a quemarropa, teniendo como primera víctima a la mujer quien en su propia casa falleció por impacto de arma de fuego. Una vez muerta la mujer, el

esposo se rindió y en esas circunstancias fue captado por los ronderos, quienes luego de golpearlo lo llevaron arrastrado un largo tramo por la ruta a Llaucán, donde lo ultimaron con un disparo en la cabeza y abandonaron al cuerpo sin vida.

Los diferentes medios de comunicación locales y regionales lo trataron este hecho como insólito, toda vez que, resulta paradójico que entre los sentenciados se encuentren personas que pregonaban la justicia y castigo para los delincuentes; más aún si uno de ellos desempeñaba el cargo de presidente provincial de las Rondas Campesinas de la provincia de Chota; agregando que el mismo dirigente ejercía el cargo de presidente del Frente de Defensa de la provincia de Chota<sup>38</sup>

**- Presidente provincial sentenciado por delito de secuestro<sup>39</sup>**

Entre los titulares de primera plana de los diarios se publicó: Condenan a 30 años de cárcel a dirigente de Rondas Campesinas<sup>40</sup>. La nota informativa refería a la sentencia emitida contra el presidente de la Central Provincial de rondas campesinas de Chota, procesado y sentenciado a 30 años de cárcel por el delito de secuestro en agravio de dos ciudadanos del Centro poblado de La Púcara, distrito de Tacabamba, provincia de Chota.

Según se advierte en la carpeta fiscal No. 2014-97-0- el acusado, en su calidad de presidente de la Central Única de Rondas Campesinas de Chota, a través de su organización, secuestró a dos comuneros que, según versión del propio dirigente sentenciado, eran sospechosos de la muerte de una mujer, cuyo cadáver apareció en la periferia del Centro Poblado La Púcara del distrito de Tacabamba. La acusación fiscal refería que los agraviados estuvieron secuestrados por el lapso de 15 días y durante ese periodo recibieron castigos degradantes, torturas, golpes

---

<sup>38</sup> Radio Siglo 21 25/05/14

<sup>39</sup> EXP. No. 155- 2014-0-0610-JR-PE-02

<sup>40</sup> El diario La República (07/06/2017)

físicos llegando al extremo de colgarlos de los testículos, todo ello bajo la orden del acusado-presidente provincial de rondas campesinas.

La acusación fiscal concluye que los hechos califican como delito contra la Libertad Personal, en su modalidad de secuestro agravado, previsto en el artículo 152°, primer párrafo, del Código Penal, concordante con el segundo párrafo, incisos 1) y 10) del mismo Código, razón por la cual se solicita 30 años de pena privativa de la libertad y el pago de reparación civil a favor de los agraviados.

Por su parte el Juzgado Supra provincial de Cajamarca, falló condenando al acusado a 30 años de pena y el pago de S/. 5,000 de reparación civil<sup>41</sup>. La sentencia fue apelada por el sentenciado, cuya revisión estuvo a cargo de la Sala Superior Mixta de apelaciones de la provincia de Chota y, tras el análisis de la recurrida, consideró que el órgano de Primera Instancia ha materializado deficiencias en la motivación externa, vicio procesal que acarrea una nulidad absoluta; por lo que dispuso un nuevo juicio oral con otro colegiado, bajo los siguientes fundamentos: i) el procesado ha sido acusado en su condición de integrante de una organización ronderil<sup>42</sup>, razón por la cual correspondía que el Juzgador realice un análisis minucioso del Acuerdo Plenario 1-2009/CJ-116, a efecto de verificar la concurrencia o no de los elementos que comporta la Jurisdicción Comunal-Ronderil<sup>43</sup>.

En ese orden de ideas, la Sala Superior dispuso nuevo juicio oral, con otro colegiado, juicio que concluyó condenando nuevamente al acusado a 30 años de pena privativa de la libertad y el pago de S/. 10, 000 de reparación civil. Esta segunda sentencia fue apelada por el sentenciado y, a la fecha se encuentra a la espera de la audiencia en segunda instancia.

---

<sup>41</sup> Exp. No. 155- 2014-87-0610-JR-PE-02

<sup>42</sup> Presidente de la Central Única de Rondas Campesinas de Chota

<sup>43</sup> Exp. 155-2014-87-0610-JR-PE-02

Mas allá del fallo que pueda darse, se advierte que el presidente provincial de rondas ha participado en la intervención de dos personas que a decir del mismo acusado se encontraban involucrados en la muerte de una mujer del Centro poblado de La Púcara, distrito de Tacabamba; sin embargo, pese a los crueles castigos que aplicó el rondero acusado, no se ha logrado determinar la autoría del asesinato de la mujer que investigaban las rondas campesinas, máxime que el Ministerio Público manejó la hipótesis de que se trataba de un suicidio.

### **Jueces desconocen facultades jurisdiccionales de las rondas campesinas<sup>44</sup>.**

La Sala Superior de Apelaciones de la provincia de Chota, ha determinado que las rondas campesinas contravienen el ordenamiento jurídico vigente, evidenciándose su arbitrariedad pues en mérito al artículo 1° de la Ley No. 27908-Ley de rondas campesinas, este colectivo organizado de personas tiene como función colaborar en la solución de conflictos a través del mecanismo conciliatorio (extrajudicial). Ello, sin embargo, para concretarse exige el advenimiento voluntario de las partes en conflicto, no la imposición ni el activismo decisorio de las rondas campesinas. Esa ineludible exigencia en modo alguno se ve reflejada en el contenido del acta de fecha 26 de setiembre del 2013, haciendo patente más bien un proceder que desborda la facultad conferida por la Ley de Rondas Campesinas y además desnaturaliza la función que éstas cumplen<sup>45</sup>. En este caso analizado, la Sala Superior de Chota confirmó una sentencia por el delito contra el patrimonio en su modalidad de usurpación agravada, cuyo sentenciado resultó el presidente de rondas del distrito de Cochabamba – provincia de Chota. La Sala Superior fundamenta su decisión en el sentido que la función de las rondas campesinas es sólo conciliadora, afirmando que la organización rondera estaría invadiendo la competencia de la jurisdicción ordinaria; agrega que el personal de las rondas campesinas no está capacitado para administrar justicia.

---

<sup>44</sup> Exp. 142-2015 – Sala superior de apelaciones Chota

<sup>45</sup> Sentencia de vista: Exp. 142-2015 – Sala superior de apelaciones Chota

En el caso referido se evidencia que la Sala Superior reconoce la función de las rondas como conciliadora y expresa su malestar porque la organización rondera estaría invadiendo la competencia de la jurisdicción ordinaria y agrega que el personal de las rondas campesinas no está capacitado para administrar justicia. La controvertida posición de la justicia ordinaria no es aceptada por las rondas campesinas. Éstas aseguran que, tanto la constitución política, como la ley de rondas campesinas y el acuerdo plenario 1-2009, las otorgan facultades jurisdiccionales para resolver todos los casos y todas las materias: homicidios, feminicidios, robos, violación sexual y otros, sin limitación alguna.

### **Jueces sentencian presionados por las rondas campesinas.**

En el expediente No. 42-2009<sup>46</sup> fueron sentenciadas tres personas, acusadas por el delito de homicidio calificado. El hecho se remonta al mes de agosto, cuando el cuerpo sin vida de un campesino fue encontrado en un camino cercano al pueblo del distrito de Chugur, provincia de Hualgayoc. La Policía Nacional del distrito inició las indagaciones preliminares y no encontró indicios sobre la autoría del crimen; sin embargo, las rondas campesinas de la zona intervinieron en forma directa a tres vecinos que, según los ronderos, tenían problemas de tierras con el agraviado y eran las únicas sospechosas del asesinato en referencia. Luego de la cadena ronderil y el castigo aplicado por la organización rondera, los detenidos fueron paseados por las calles de la ciudad y luego entregados a la Policía Nacional, por cuanto, según la versión de los ronderos habían confesado ser los autores del delito investigado.

Como era de esperarse, los “convictos y confesos” ante las rondas campesinas, negaron su participación frente a la justicia ordinaria. En el interrogatorio afirmaron que se auto inculparon forzados por los castigos que recibieron de parte de las rondas campesinas; consecuentemente, la justicia ordinaria deja en libertad a los detenidos, bajo el argumento que no existía elementos

---

<sup>46</sup> Exp. No. 42-2009- -Sala Superior Mixta Chota

de convicción para disponer su prisión. Enterados de la liberación de los inculcados, las rondas campesinas, procedieron a intervenir a los liberados y los volvieron a entregar ante el Ministerio Público, exigiendo que se haga efectiva la prisión, bajo la amenaza de tomar el local del Ministerio Público.

Pese a que los procesados negaron en todo momento su participación en el homicidio, el Ministerio Público presentó como medios probatorios las actas de esclarecimiento de las rondas campesinas acusó por el delito de homicidio calificado. La Sala Superior Mixta de Chota acogió el requerimiento fiscal y sentenció a los tres acusados, a 30 años de pena privativa de la libertad más el pago de S/. 20, 000 por concepto de reparación civil. Ante el recurso de nulidad interpuesto por los sentenciados, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema<sup>47</sup>, confirmó la sentencia de la Sala Superior, alegando que, si bien la defensa refiere que los ronderos castigaron físicamente a los procesados, los sentenciados no han podido probar que fueron torturados para auto inculcarse a nivel de las rondas campesinas. En el presente caso se evidencia una deficiente defensa técnica, la misma que no pudo probar la violación del debido proceso y la afectación al derecho de defensa durante las diligencias de investigación.

### **Rondas exigen archivamiento de investigación por el delito de lesiones graves.**

En la carpeta fiscal No. 155-2013, se dispuso la apertura de investigación por el delito de lesiones graves contra dos personas y lesiones leves en contra de otras dos, hecho ocurrido en el centro Poblado de La Pucara, distrito de Tacabamba. El antecedente del caso tenía que ver con una demanda por retracto de una parcela de terreno ante el Juzgado civil de Chota. Los recontrayentes consideraban que tenían mejor derecho por la cercanía a su vivienda y, al advertir que el proceso no aceleraba como lo querían, decidieron ingresar y tomar posesión en el terreno materia de litis. Por su parte, los demandados -compradores iniciales- que hasta ese momento

---

<sup>47</sup> R.N. No. 3245-2010- Cajamarca



se encontraban en posesión decidieron armarse con palos y machetes y expulsaron violentamente a los usurpadores. El enfrentamiento dejó como saldo a cuatro personas heridas en diferentes partes del cuerpo, dos de ellas quedaron con las manos mutiladas.

No obstante, el inicio de las diligencias preliminares y los apercibimientos decretados por el Ministerio Público, los investigados no concurrieron a declarar para el esclarecimiento de los hechos delictivos. Las diligencias fiscales fueron frustradas por cuanto, las rondas campesinas, decidieron que el caso sea investigado y resuelto en la misma comunidad. Con ese objetivo retuvieron a los autores de las lesiones y los obligaron a cumplir trabajo comunal durante 30 días y el pago de los gastos de medicina y tratamiento médico a favor de los heridos. Cumplida la sanción y el pago respectivo, los ronderos se apersonaron al Ministerio Público y bajo amenaza de llevarlo a rondar a la comunidad le obligaron a que emita una disipación de sobreseimiento. Pese a la gravedad de las lesiones, el fiscal provincial a cargo del caso se vio obligado archivar la denuncia penal, bajo el argumento de que los agraviados no habrían concurrido para ratificarse en su denuncia.

Si bien, el representante del Ministerio Público no reconoce su frustración, en la práctica se vio obligado a cumplir las decisiones de las rondas campesinas.

### **Rondas campesinas manipulan evidencias y testigos<sup>48</sup>.**

En el proceso No. 205-2005- se advierte que, el cuerpo sin vida del profesor de apellido Vásquez fue encontrado en el Pasaje La Alborada, a medio Km de la ciudad de Chota, en esta ciudad de Chota. Según el protocolo de necropsia el cuerpo sin vida del profesor presentaba: fractura en base de cráneo, traumatismo cráneo-encefálico y contusiones múltiples en el cuerpo, pruebas que acreditan un cruel asesinato. Tanto la Policía Nacional como el representante del Ministerio Público, iniciaron las investigaciones, pero no lograron indicio

---

<sup>48</sup> Exp. No. 205-2005/ Exp. No. 135-2007 - Sala Superior Mixta-Chota

alguno sobre la autoría del horrendo asesinato. Fueron las rondas campesinas de la provincia de Chota quienes, después de seis meses, presentaron en la plaza de armas a dos personas, según los ronderos, autores de la muerte del fallecido profesor. Tras la presentación pública fueron entregados ante el Ministerio Público.

Los sindicatos como autores de habían declarado culpables ante las rondas campesinas y, a la vez, brindaron nombres de otras tres personas que también habrían participado en el homicidio; sin embargo, ante la justicia ordinaria, negaron su participación en el asesinato imputado, agregando que se auto inculparon debido a los fuertes castigos que habían recibido en el fuero ronderil.

Recibida la causa, el Poder Judicial dispuso el encarcelamiento de las personas arrestadas por las rondas campesinas y a la vez ordenó la ubicación y captura de las otras tres cuya identidad brindaron los encarcelados, los mismos que por temor al castigo de las rondas prefirieron entregarse a la justicia. Luego de las diligencias de esclarecimiento, el Ministerio Público formuló acusación fiscal por el delito de homicidio calificado contra las cinco personas encarceladas, solicitando para ellos 30 años de pena privativa de la libertad y S/. 40,000 por concepto de reparación civil. Tras el recurso impugnatorio (nulidad) interpuesto por los sentenciados, la Corte Suprema, dispuso la nulidad de la sentencia emitida por la Sala Superior Mixta de Chota, fundando su decisión en que existían indicios de que las rondas campesinas investigaron aplicando castigos físicos y, en consecuencia, ordenó nuevo juicio oral por otra Sala Superior, debiendo otro colegiado convocar a los dirigentes de las rondas a declarar la forma y circunstancias de la intervención de las rondas al momento de investigar a los imputados.

En el nuevo juicio oral se convoca a los dirigentes ronderos para que expongan la forma y modo en que intervinieron a los procesados, concluyéndose que efectivamente se habían

violado los derechos fundamentales de los acusados. El nuevo colegiado sentenció absolviendo a los cinco procesados y dispuso su inmediata libertad de los mismos. Esta nueva sentencia fue impugnada (recurso de nulidad) por la parte agraviada; siendo así, la Corte Suprema revisó la recurrida y resolvió confirmando la decisión de la Sala Superior de Chota. En consecuencia, en el año 2012, siete años después de ocurridos los hechos, el proceso penal concluyó archivándose en forma definitiva.

En ese orden del razonamiento, se debe tener presente que el hecho delictivo no se logró esclarecer, debido a que las rondas campesinas forzaron las declaraciones de los principales sospechosos, convirtiéndolas en pruebas ilícitas.

### **Rondas campesinas exigen sanciones sin suficiencia probatoria.**

Conforme al expediente No. 135-2007, dos personas fueron procesadas y sentenciadas por el delito de homicidio calificado en agravio de la señora de apellido Rojas, hecho ocurrido en el distrito de Santa Cruz, provincia del mismo nombre. Según las indagaciones preliminares realizadas por las rondas campesinas, la autoría recaía en una vecina de la agraviada, quien según los ronderos habría contratado a un brujo del lugar para dar muerte a la agraviada por problemas sentimentales.

Aunque no se había recabado pruebas que corroboren la versión de los integrantes de las rondas campesinas, éstas exigieron al fiscal provincial que sea severo en su acusación y tras sendas movilizaciones lograron la acusación fiscal, el mismo que hizo suya la tesis de los ronderos, en el sentido de que el brujo dio un brebaje con veneno para terminar con la víctima. Por su lado, la Sala Superior Mixta de Chota aceptó el requerimiento fiscal y condenó al brujo

como autor material a 25 años de pena privativa de la libertad y en condición de instigadora a su coacusada de apellido Mera. Los sentenciados interpusieron recurso de nulidad (casación), logrando así que la Corte Suprema disponga un nuevo juicio, conducido por un nuevo Colegiado. En el segundo proceso de enjuiciamiento se condenó al brujo y se absolvió a la mujer que según los ronderos habría pagado por la muerte de la agraviada. Interpuesto el recurso impugnatorio (contra la segunda sentencia), la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, declaró la nulidad de la sentencia subida en grado y reformándola absolvió al anciano encarcelado. El sustento de la absolución giró en la insuficiencia probatoria y en el hecho que las rondas campesinas forzaron las primeras declaraciones de los procesados.

Conforme al análisis de los casos se evidencia que las rondas campesinas no están preparadas para indagar o esclarecer delitos de homicidios u otros que requieren métodos y técnicas especializadas que generen convicción sobre la inocencia o culpabilidad de los investigados. Haciendo hincapié en lo antes dicho, las investigaciones que realizan las rondas campesinas siempre generan controversia; más aún si, como también queda expresado algunas personas imputadas y sancionadas como culpables en la jurisdicción especial de las rondas, resultan absueltas en los enjuiciamientos que realiza la justicia ordinaria.

### **3.2. Informes periodísticos sobre las acciones de las rondas campesinas.**

El impacto social que produce el accionar de las rondas campesinas, en muchos casos, se debe a los titulares o informes o periodísticos, conocidos en el ámbito local, regional y nacional. Entre otros, se tiene los siguientes:

**Ronderos involucrados en homicidio de los esposos Collantes Vizconde fueron capturados<sup>49</sup>**

---

<sup>49</sup> Panorama Cajamarquino, el 14 de abril del año 2012

El informe periodístico refería la captura de dos dirigentes de las rondas campesinas de la provincia de Chota que incursionaron conjuntamente con otros ochenta ronderos en la hacienda Yanacancha para desalojar por la fuerza a los esposos Collantes Vizconde, de cuya intervención salieron asesinados los esposos antes referidos.

### **Dictan 35 años de cárcel para asesinos de esposos Collantes <sup>50</sup>**

En este informe periodístico se dio cuenta que el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Cajamarca condenó a 35 años de prisión a cinco personas acusadas por el delito de homicidio calificado con alevosía en agravio de la pareja de esposos, Collantes Vizconde. El diario de la fecha agrega que el Juzgado Supraprovincial encontró suficientes pruebas que los señalan como autores del homicidio de la pareja, hecho ocurrido el 5 de enero del 2012, cuando un grupo de aproximadamente 80 personas, entre ellos ronderos de Chota, ingresaron a la hacienda de Yanacancha Baja y los mataron a balazos.

### **Ronderos protestan contra el Poder Judicial<sup>51</sup>**

La República de fecha 02 enero de 2017 informó que, el presidente de la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Chota, preparaba una movilización contra el Poder Judicial, por haber sentenciado a dos de sus principales dirigentes, entre ellos al ex presidente provincial de rondas campesinas de apellido Campos, sentenciado a diez años de pena privativa de la libertad, por el delito contra la libertad, en su modalidad de secuestro, en agravio del señor López Delgado. Este hecho se remonta al año 2016 cuando el dirigente provincial de las rondas campesinas, de ese entonces, en su afán de hacerse justicia ante la muerte de su hijo, organizó un grupo de ronderos e incursionó violentamente en un local nocturno donde habrían libado licor los presuntos autores del asesinato. Al tomar por la fuerza el local nocturno, el dirigente

---

<sup>50</sup> Diario regional Panorama Cajamarquino, 26 abril 2014

<sup>51</sup> Diario La República

rondero y sus acompañantes sacaron los bienes muebles del referido local, objetos que fueron quemados en la vía pública, seguidamente retuvieron por la fuerza a supuesto sospechoso de la muerte del hijo de dirigente rondero y lo trasladaron a la zona rural para que declare respecto a las circunstancias en que habrían dado muerte al hijo del dirigente. El hecho violento protagonizado por las rondas campesinas fue denunciado ante el Ministerio Público y tras las investigaciones se formuló acusación por los delitos de daños y secuestro, proceso que en primera instancia concluyó con sentencia condenatoria de 10 años de pena privativa de la libertad y 10,000 soles como concepto de reparación civil contra el presidente provincial de rondas campesinas.

En secuela del proceso quedó acreditado que el dirigente rondero se hizo justicia por su propia mano frente a la muerte de su hijo; sin embargo, la Sala Superior Mixta de Chota, absolvió al dirigente rondero de apellido Rafael Campos y otros ciudadanos ronderos<sup>52</sup>, evidenciándose una vez más que la movilización y reclamo airado de la facción de las rondas campesinas forzó una sentencia absolutoria.

### **Condenan a 30 años de cárcel a dirigente de Rondas Campesinas<sup>53</sup>**

Esta nota informativa refería a la sentencia judicial emitida contra el presidente provincial de rondas campesinas, de la provincia de Chota, sentenciado por el delito de secuestro en agravio de dos ciudadanos del centro poblado de La Púcara, distrito de Tacabamba, provincia de Chota. El fiscal a cargo del caso, No. 2014-97- acuso por el delito de secuestro y lesiones solicitando 30 años de cárcel por cuanto, el acusado, en calidad de Presidente de la Central Única de Rondas Campesinas de Chota, secuestró por el lapso de 15 días a dos campesinos, quienes, según la acusación fiscal, recibieron castigos degradantes, los han colgado de los testículos y torturado de diferente forma, todo bajo la orden del acusado, con el fin de hacerles declarar su

---

<sup>52</sup> Radio Siglo 21-Chota. 03-01-17

<sup>53</sup> Diario La República (07/06/2017)

participación en la muerte de una mujer que apareció muerta en el centro poblado de La Púcara, distrito de Tacabamba, provincia de Chota.

### **Ronderos retienen a un alcalde<sup>54</sup>.**

El informe periodístico hizo conocer que, el alcalde del distrito de Yantaló, en la provincia de Moyobamba (San Martín), José Cabrera Guevara (42), y el teniente gobernador de esa jurisdicción, llevaban tres días retenidos por un grupo de ronderos que los consideraba sospechosos de haber participado en el homicidio del presidente de las rondas campesinas de dicho distrito.

### **Ronderos de Cajamarca se oponen a ley que los regula<sup>55</sup>.**

Así se informó en aquella fecha, al conocer que cientos de ronderos de Bambamarca y Chota en Cajamarca, acataron un paro de 24 horas contra el proyecto de ley que buscaba regular judicialmente las acciones de las rondas campesinas en las diferentes regiones del país.

### **Abusos de ronderos ponen en alerta a Defensoría y Fiscalía<sup>56</sup>.**

En este caso, se informó que las rondas campesinas hicieron comer un rocoto con pepa para escarmiento a tres personas que asaltaron un camión con leche e hirieron de bala al conductor en la zona de Cajamarca. El mismo diario informó que en La Libertad, la ronda urbana –grupo de vecinos- sin autorización para ejercer justicia ni imponer sanción– acusó a una anciana de haber empleado la brujería, la sometió a tortuosos castigos hasta matarla.

El Comercio agregó que, cada semana, los medios de comunicación dan cuenta de hechos en que los miembros de las rondas actúan como si fueran los guardianes de la moral. El Diario

---

<sup>54</sup> Diario El Comercio (30/12/2015 )

<sup>55</sup> En el diario El Comercio (23/06/2015)

<sup>56</sup>En el diario El Comercio de fecha 6/02/2014

destaca como ejemplo que, en Cajamarca, un grupo encabezado por el rondero de apellido Chuquilín irrumpió en un club nocturno y las azotó públicamente a las prostitutas. En Cutervo, otro grupo de ronderos atacó con fuetes a un grupo de médicos y enfermeras cuando pasaban momento de esparcimiento en un bar de esa ciudad. En Cajamarca castigaron a dirigentes por estar de acuerdo con que el Estado emplee recursos del canon minero en obras Públicas. En muchos casos las rondas intervienen encapuchados decía la nota periodística y se preguntaba ¿Por qué imponer la ética y la moral con golpes cuando en las ciudades sí existen comisarías y juzgados? Es lo que critican los antropólogos y lo que ha puesto en alerta al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo<sup>57</sup>, concluyó el diario.

### **3.3. La jurisdicción especial y los derechos fundamentales.**

El artículo 149° de la carta magna dispone que, las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona.

Si bien, el artículo referido dispone que, las comunidades deberán ejercer facultades jurisdiccionales, con apoyo de las rondas campesinas, ello no significa que es un ente secundario, tampoco se debe discriminar como si fuera un ente de simple apoyo afirman los apologistas de las rondas campesinas; agregan que las rondas campesinas representan a la única organización que protege los derechos constitucionales reconocidos en nuestra constitución.

La premisa es que los derechos fundamentales vinculados a la actuación de las Rondas Campesinas y de sus integrantes, en este caso el derecho a la identidad étnica y cultural y el derecho colectivo al ejercicio de la jurisdicción especial, nunca se reconocen de manera absoluta, y que existen otros derechos individuales y colectivos con los cuales deben

---

<sup>57</sup> El Comercio, 04/07/ 2014



ponderarse los derechos fundamentales antes citados ... Entre los derechos fundamentales de primer orden, inderogables, se debe citar, enunciativamente, la vida, la dignidad humana, la prohibición de torturas, de penas y de tratos inhumanos, humillantes o degradantes, la prohibición de la esclavitud y de la servidumbre, la legalidad del proceso, de los delitos y de las penas –bajo la noción básica de “previsibilidad” para evitar vulnerar el derecho a la autonomía cultural<sup>58</sup>.

En atención a lo expuesto será de rigor considerar como conductas que atentan contra el contenido esencial de los derechos fundamentales y, por tanto, antijurídicas y al margen de la aceptabilidad del derecho consuetudinario, (i) las privaciones de libertad sin causa y motivo razonable –plenamente arbitrarias y a margen del control típicamente ronderil-; (ii) las agresiones irrazonables o injustificadas a las personas cuando son intervenidas o detenidas por los ronderos; (iii) la violencia, amenazas o humillaciones para que declaren en uno u otro sentido; (iv) los juzgamientos sin un mínimo de posibilidades para ejercer la defensa –lo que equivale, prácticamente, a un linchamiento-; (vi) la aplicación de sanciones no conminadas por el derecho consuetudinario; (vii) las penas de violencia física extrema –tales como lesiones graves, mutilaciones- entre otras<sup>59</sup>.

La ley 27908 (ley de rondas campesinas), en su artículo 1º establece que “los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas se aplican a las rondas campesinas en lo que les corresponda y favorezca”, siendo ello así, se concluye que las rondas campesinas, aunque no sean indígenas tienen el derecho que le corresponde a las comunidades indígenas y, en el mismo orden de ideas, el Convenio OIT 169 que reconoce a los pueblos indígenas en su artículo 9º incio1), también se tendría que aplicar a las rondas campesinas.

---

<sup>58</sup> F.11- Acuerdo Plenario 1-2009

<sup>59</sup> F.12-Acuerdo Plenario 1-2009

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, dispone en el artículo 1° que, los pueblos indígenas tienen derecho, colectiva o individualmente, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el derecho internacional relativo a los derechos humanos. Siendo ello así, se debe reclamar en igual condición el exhaustivo respeto a los derechos fundamentales de los miembros de las propias comunidades, lo que en la práctica no se cumple, pues como queda dicho líneas arriba, los excesos cometidos por los integrantes de las rondas campesinas están a la orden del día.

## **CAPITULO IV: MARCO METODOLOGICO**

### **4.1. MÉTODOS, TÉCNICAS, MATERIALES E INSTRUMENTOS**

#### **4.1.1. Métodos.**

Para lograr la investigación propuesta se utilizó los métodos siguientes: analítico, sintético, histórico, hermenéutico, inductivo.

##### **- Analítico.**

El método analítico consiste en el análisis de las partes de un fenómeno u objeto de estudio. Se examina las partes de un todo y se relaciona entre ellas. En esta investigación, el método, permitió analizar, el conjunto de casos resueltos en la jurisdicción especial de las rondas campesinas y, a su vez, relacionarlos con los casos y/o materias que resuelve la justicia ordinaria. Permitted también examinar los procesos penales seguidos contra los integrantes de las rondas campesinas y en el mismo orden de ideas las causas que generaron conflicto entre las rondas y la Justicia ordinaria.

##### **- Sintético.**

Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos para luego formular una teoría que unifica los diversos elementos analizados. Este método fue utilizado al momento del planteamiento de la hipótesis; es decir, el investigador sintetizó las ideas abstraídas del objeto de estudio y estableció una explicación tentativa que finalmente se sometió a prueba.

Mediante este método se planteó la hipótesis de trabajo y permitió la elaboración del resumen y las conclusiones de la investigación; a la vez, permitió proponer algunas recomendaciones para evitar conflictos o controversias entre la justicia ordinaria y la justicia especial.

- **Histórico.**

Este método consiste en el estudio o descripción de hechos ocurridos en el pasado y relacionarlos con el presente para la formulación de ideas o teorías futuras. En la presente investigación, este método permitió examinar la historia de las rondas campesinas, sus usos y costumbres, los casos que resuelven y los mecanismos de justicia en la jurisdicción de las rondas campesinas, información que fue utilizada para la formulación de propuestas a fin de mejorar la administración de justicia en Chota, Cajamarca.

- **Hermenéutico.**

La hermenéutica es la herramienta para la interpretación de la realidad problemática, considerando los antecedentes del problema de investigación: la legislación, la dogmática jurídica la jurisprudencia, los usos y costumbres, entre otros aspectos relativos a la administración de justicia en la jurisdicción especial de las rondas campesinas. En consecuencia, este método permitió la interpretación de textos, entrevistas, encuestas, usos y costumbres de las rondas campesinas que operan en Chota. A través de este método se

interpretó la realidad jurídica y social de la jurisdicción especial de las rondas campesinas, en Chota -Cajamarca

- **Inductivo.**

Es el razonamiento que parte del estudio de casos o hechos particulares para llegar a ideas o conocimientos generales. Este método permitió la formulación de hipótesis de investigación, tras el estudio de los casos particulares encontrados en la realidad problemática.

Se utilizó este método para estudiar cada uno de los casos o materias que resuelven las rondas campesinas y a la vez se examinó las causas que generan conflictos entre los miembros de las rondas campesinas y los operadores de la justicia ordinaria en la provincia de Chota.

Asimismo, se observó la actuación de las rondas campesinas en su contexto: sus usos, costumbres, mecanismos de justicia especial, la legislación que la autoriza, etc.

#### **4.1.2. Técnicas.**

En la presente investigación se utilizó las siguientes técnicas de estudio:

- **Encuestas.** Fueron aplicadas a los ronderos que participaron en el XII congreso regional rondero que se llevó a cabo en Chota los días 27 y 28 de enero de 2018.
- **Entrevistas:** Fueron entrevistados los fundadores de las rondas campesinas y algunos actuales dirigentes de las rondas campesinas que voluntariamente nos brindaron sus aportes sobre tema.
- **Fichaje:** Se utilizó las fichas bibliográficas, textuales y de comentario, tanto de libros, como revistas, actas de reuniones y acuerdos de rondas, entrevistas, etc.

- **Lectura de bibliografía:** Se dio lectura a libros, tesis, revistas, diarios y otros documentos referidos al pluralismo jurídico, jurisdicción especial, rondas campesinas, competencia y jurisdicción, entre otros.

- **Análisis de expedientes judiciales:** Se cumplió con el análisis de expedientes judiciales cuyo archivo corresponde al estudio jurídico del investigador.

- **Análisis de las actas:** Se analizó las actas de solución de conflictos y acuerdos tomados en la jurisdicción de las rondas campesinas.

#### **4.1.3. Instrumentos.**

- **Fichas de resumen:** Estas fichas fueron utilizadas para resúmenes de libros, tesis, revistas y otros documentos relacionados con el tema de investigación.

- **Cuestionario:** Fue utilizado para interrogar, a ronderos en actividad y a ciudadanos no ronderos. En el primer caso se interrogó a 95 dirigentes ronderos distritales que participaron en el XII regional de las rondas campesinas, durante los días 27 y 28 de enero de 2018 y en el segundo caso se encuestó a 95 ciudadanos que no desempeñan como ronderos.

#### **4.1.4. Población y muestra.**

##### **4.1.4.1. La población.**

Se escogió como población al conjunto de miembros que conforman las rondas campesinas de la provincia de Chota y, por otro lado, la población de la provincia de Chota, en este caso, los ciudadanos que no integran las rondas campesinas.

Se tuvo también una población de 591 expedientes judiciales, los cuales pertenecen al archivo del propio investigador; es decir, los casos defendidos por el investigador en el periodo 2010- 2017<sup>60</sup>. El total de casos (591), 158 corresponden a la materia penal, 73 a materia civil,

---

<sup>60</sup> archivo del estudio Jurídico Siglo 21, ubicado en la Av. Inca Garcilaso de la Vega No. 473 de la ciudad de Chota

201 sobre familia<sup>61</sup>, 31 casos de materia constitucional, 85 procesos administrativos, 21 contencioso-administrativos, 7 laborales y 15 procesos por faltas. De los 158 procesos penales, 33 son seguidos contra los miembros de las rondas campesinas, por los delitos de homicidio, secuestro, usurpación, lesiones, etc.

#### **4.1.4.2. La muestra no probabilística.**

Se escogió a los delegados de las rondas (95 dirigentes de las rondas campesinas): cinco ronderos de cada uno de los 19 distritos de la provincia de Chota, quienes participaron en el XII congreso regional de rondas campesinas, durante los días 28 y 29 de enero 2018. A los dirigentes ronderos se les encuestó sobre su competencia y los casos que resuelven dentro de su jurisdicción especial; asimismo, se les consultó respecto a las causas que generan los conflictos entre rondas campesinas y la justicia ordinaria y, su opinión sobre la posibilidad de delimitar la competencia material de las rondas campesinas.

Se analizó los expedientes judiciales (en materia penal), tramitados en el distrito judicial de Cajamarca, sede Chota, cuyos procesados fueron los miembros integrantes de las rondas campesinas, en el periodo comprendido entre 2010 - 2017. Se estudió 158 casos -en materia penal- del archivo del investigador, de los mismos que 33 procesos fueron seguidos contra los miembros de las rondas campesinas. De esos treinta tres expedientes se tomó a tres como muestra no probabilística.

---

<sup>61</sup> alimentos, filiación, divorcios, etc.

## **CAPITULO V: RESULTADOS**

### **5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS.**

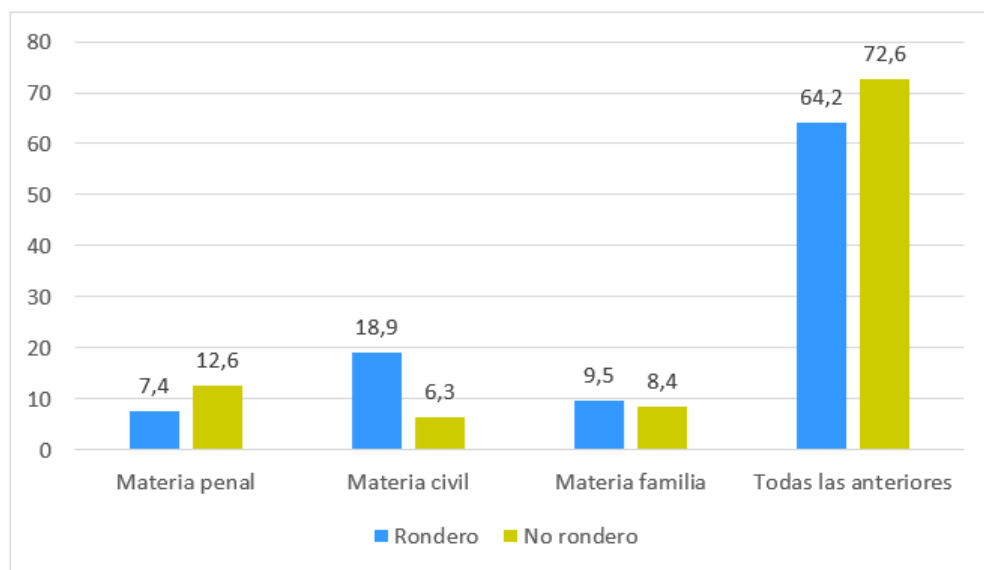
Mediante el programa spss, se realizó el análisis de datos y porcentajes de los casos y materias que resuelven las rondas campesinas de Chota, las causas que generan situaciones conflictivas entre las rondas campesinas y la justicia ordinaria. En el mismo orden de ideas se analizó la percepción de la población tanto ronderos como no ronderos respecto a la delimitación de las competencias material de las rondas campesinas.

#### **Tabla No. 1: pregunta 01**

¿Conoce usted, qué materias o casos resuelven las rondas campesinas en Chota?	¿Es miembro de las rondas campesinas?			
	Si		No	
	N	%	N	%
<b>A.</b> Casos en materia penal (homicidios, violaciones, lesiones)	7	7,4	12	12,6
<b>B.</b> Casos en materia civil (desalojos, herencias, linderos)	18	18,9	6	6,3
<b>C.</b> Casos en materia de familia (alimentos, violencia familiar)	9	9,5	8	8,4
<b>D.</b> Todos los casos que se presentan, sin importar materia	61	64,2	69	72,6
<b>Total</b>	95	100	95	100

*Fuente: elaboración propia 2018.*

**Gráfico 01:** pregunta 01



*Fuente: elaboración propia 2018.*

En este caso, se advierte que el 64.2% de los encuestados afirma que las rondas campesinas resuelven todos los casos que se les presenta, sin límite en materia; es decir que un alto porcentaje de los ronderos reconoce que toman a su cargo todas las materias: penal, civil, familia, faltas, etc. Por su parte el 72.6 % de los ciudadanos no ronderos afirma que las rondas campesinas resuelven todos los casos sin importarle la materia.

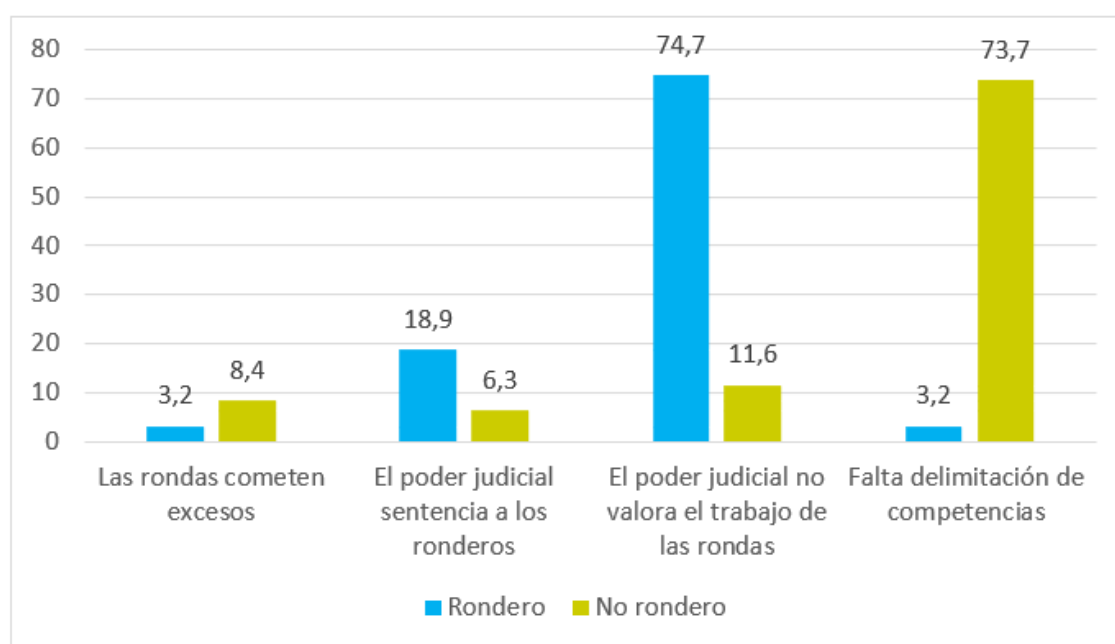


**Tabla No. 2: pregunta 02**

¿Cuáles son las causas que generan controversia o conflictos entre las rondas campesinas y la Justicia ordinaria (Poder Judicial, Ministerio Público, PNP) en Chota?	¿Es miembro de las rondas campesinas?			
	Si		No	
	n	%	n	%
<b>A.</b> Las rondas cometen excesos	3	3,2	8	8,4
<b>B.</b> ¿Los miembros de las rondas campesinas son procesados por la Justicia ordinaria?	18	18,9	6	6,3
<b>C.</b> La Justicia ordinaria no valora los esclarecimientos que realizan las rondas campesinas	71	74,7	11	11,6
<b>D.</b> La falta de delimitación de la competencia	3	3,2	70	73,7
<b>Total</b>	95	100	95	100

*Fuente: elaboración propia 2018*

**Gráfico 02: pregunta 02**



*Fuente: elaboración propia 2018*

Se observa que, el 74.7%, de los encuestados que son miembros de las rondas campesinas afirma que la justicia ordinaria no reconoce el trabajo de las rondas campesinas; es decir que los ronderos se encuentran resentidos porque han sido desconocidos por justicia ordinaria. El 18.9%, afirma que, los miembros de las rondas campesinas son procesados por la Justicia

ordinaria y, eso les causa molestia. Mientras tanto, el 3.2%, de estos encuestados afirma que las causas se deben a los excesos que ellos cometen. El 3.2% atribuye los conflictos a la falta de delimitación de competencia.

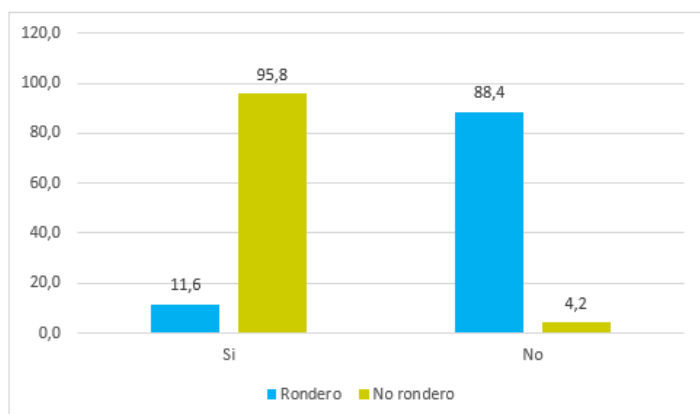
Por su lado, el 73.7% de los encuestados que no son miembros de las ronda, afirma que el conflicto se debe a la falta de delimitación de la competencia material en la jurisdicción de las rondas campesinas- El 11,6% de estos mismos encuestados afirma que la justicia ordinaria no valora el trabajo de las rondas campesinas; el 8.4%, afirma que la causa de conflictos ente las rondas campesinas y la justicia ordinaria se debe a que los ronderos cometen excesos en sus funciones; el 6.3% afirma que la justicia ordinaria procesa a los miembros de las rondas campesinas.

**Tabla No. 3: pregunta 03**

¿Cree usted que la delimitación de la competencia material de las rondas campesinas evitaría situaciones conflictivas entre las rondas campesinas y la Justicia ordinaria?	¿Es miembro de las rondas campesinas?			
	Si		No	
	n	%	n	%
Si	11	11.6	91	95.8
No	84	88.4	4	4.2
Total	95	100	95	100,0

**Fuente:** elaboración propia 2018.

**Gráfico 03:** pregunta 03



**Fuente:** elaboración propia 2018

En este caso, el 95.4 % de encuestados que no son miembros de las rondas campesinas afirman que los conflictos entre las rondas campesinas y la justicia ordinaria se evitaría una vez delimitada la competencia material de las referidas rondas.

Por su parte, sólo el 11.6 % de los encuestados que son miembros de las rondas cree que delimitando la competencia material de su propia jurisdiccional se evitarían las situaciones conflictivas entre las rondas campesinas y la justicia ordinaria. Para los ronderos, el principal problema que genera conflictos es que la justicia ordinaria no reconozca las intervenciones y diligencia de indagación que realizan las ronda y por otro lado afirman que son los procesos judiciales en contra de los miembros de las rondas los que generan molestias en la jurisdicción de las rondas campesinas.

## **CAPITULO VI: DISCUSION DE RESULTADOS.**

### **Resultado No. 1:**

El 64.2% de los encuestados que no integran las rondas campesinas, afirman que las rondas campesinas resuelven todos los casos, sin importar la materia. Estos resultados son acordes a la opinión de quienes afirman que las rondas campesinas no tienen límite para ejercer funciones jurisdiccionales, de lo cual hay opiniones divididas:

La abogada Lucero del Rocío Sisnieguez quien desempeñó el cargo de Fiscal en la Fiscalía Provincial corporativa de Chota afirma que, pese a conocer los limites materiales respecto de

la aplicación de los principios de su jurisdicción especial comunal, las rondas campesinas, han aprendido a intervenir y resolver determinados casos a un nivel que resulta objetivo que se tiene el conocimiento de ejecutarse un delito, pero que por la incidencia penal (desvalor social) el Ministerio Público no debería intervenir o si lo hace, el Poder Judicial decretaría que no habría ejecutado un acto pasible de sanción penal. La autora agrega que las rondas campesinas ejercen jurisdicción en ámbitos ajenos a los que la constitución y la ley especial los faculta, principalmente porque han tomado la “legitimidad social” de su autoridad, con lo cual la intervención del Poder judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, se han visto no solo limitados sino condicionados al nivel, en casos especiales, los propios magistrados son severamente tratados, sin tomar en cuenta la racionalidad del Derecho (Sisnieguez 2015 p. 29 , 333).

Idrogo (2008) afirma que: las rondas campesinas resuelven todos los problemas de naturaleza civil y los de naturaleza penal, excepto: homicidio y violación sexual, pues los delincuentes detenidos por las rondas son entregados a las autoridades de la Jurisdicción Ordinaria, previa movilización y mitin en la plaza principal de la ciudad); capacitación y reeducación.

Yrigoyen (2002) afirma que dentro del ámbito territorial propio (del pueblo indígena, comunidad o ronda), la jurisdicción especial tiene competencia para conocer y resolver todas las materias que juzgue conveniente, de acuerdo a su propio derecho y a su potestad normativa. Agrega que, ni la Constitución ni el Convenio 169 establecen límites en cuanto a las materias o la gravedad de hechos que puede conocer y resolver el derecho indígena y enfatiza que donde la ley no distingue, el intérprete no puede distinguir, recortar o reducir competencias.

La justicia ronderil es una alternativa real y efectiva para que la población chotana ejerza su derecho fundamental de acceso a la justicia y solucione sus problemas de relevancia penal

como hurto, robo, abigeato, lesiones, usurpación, apropiación ilícita, obligación de dar suma de dinero. Entre las sanciones más comunes que aplican las rondas campesinas están, la cadena ronderil, el castigo físico y el trabajo comunal. (Gallardo, 2012, p. 177- 178).

El convenio 169 de la OIT, en su artículo 8°, 2) establece: dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

De conformidad con el art. 1° de la ley de rondas, No. 27908, las rondas colaboran en la solución de conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial conforme a la constitución y a la Ley, así como funciones relativas a la seguridad y a la paz comunal dentro de su ámbito territorial. Los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas se aplican a las rondas campesinas en lo que les corresponda y favorezca las rondas campesinas.

El reglamento de la referida, ley de rondas campesinas- D. S. No. 025-2003-JUS, en su artículo 12° ha determinado las funciones de las rondas campesinas: a) contribuir a la defensa de la integridad física, moral y cultural de los miembros de la comunidad campesina, de la Comunidad Nativa, del caserío u otro centro poblado, para mantener la paz y seguridad de la población, así como contribuir con el progreso de su pueblo. (...) d) Intervenir en la solución pacífica de los conflictos que se susciten entre los miembros de la comunidad y otros externos, siempre y cuando la controversia se origine en hechos ocurridos dentro de su ámbito comunal.

El mismo reglamento, artículo 13°, sobre la resolución de conflictos, dispone que, la rondas campesinas y ronda comunal, a base de las costumbres de la comunidad campesina, comunidad nativa, caserío u otro centro poblado al que pertenecen, pueden intervenir en la

solución de conflictos que se susciten entre miembros de la comunidad u otros externos, dentro de su ámbito territorial, mediante actuaciones que serán registradas en el libro de ocurrencias que lleva para tal efecto, el mismo que será legalizado por el juez de paz de la jurisdicción correspondiente.

La ley No. 22175, ley de comunidades nativas y desarrollo agrario de las regiones de selva, en su artículo 19° dispone que los conflictos y controversias de naturaleza civil de mínima cuantía que se originen entre los miembros de una comunidad nativa, así como las faltas que se cometan, serán resueltas o sancionadas en su caso, en forma definitiva por sus órganos de gobierno.

En muchos casos, la función jurisdiccional de las rondas campesinas, interfiere la acción de la justicia ordinaria, al extremo de desconocer la cosa juzgada y el principio ne bis in ídem, evidenciándose abiertamente que el cruce de competencias materiales, más que la competencia territorial genera conflicto entre la justicia especial y los operadores de la justicia ordinaria. En este extremo, los ronderos aplican la justicia campesina a sabiendas que les podría venir una denuncia en su contra y, por su lado los jueces resuelven tales denuncias según sea la presión del grupo. Si el grupo es mayoritario, los magistrados resuelven con mayor agilidad, atendiendo el pedido del grupo de ronderos; si el grupo es menor, la diligencia es con menor celeridad.

Como caso concreto, se tiene la carpeta fiscal No. 155-2013-Fiscalía provincial Sede Tacabamba-Chota, en cuyo caso se abrió investigación preparatoria por el delito de lesiones graves en agravio de dos personas y lesiones leves en agravio de otras dos; sin embargo, tras la intervención de las rondas campesinas, el Fiscal provincial, se vió obligado a sobreseer el caso, bajo el argumento que los agraviados no se habrían ratificado en su denuncia. A pesar de la gravedad de las lesiones (mutilación de los dedos de las manos y otras lesiones con machete), el fiscal a cargo del caso fue obligado a archivar la denuncia.

En su oportunidad, como insólitas fueron catalogadas por algunos operadores del derecho (en la Región Piura) las declaraciones del ex presidente del Poder Judicial, Duberli Rodríguez, quien abierta y públicamente avaló el accionar de las rondas campesinas que agredieron a una Juez que cumplió con una diligencia de constatación en un proceso de habeas corpus. “Yo también podría pensar que la jueza estaba obstaculizando la justicia de las rondas”, dijo Duberli Rodríguez refiriéndose al castigo físico que propinaron los ronderos de la provincia de Ayabaca, contra la jueza María Soledad Chuquillanqui Chinguel. La referida jueza del Juzgado penal Unipersonal de esa provincia se constituyó con el objeto de ejecutar un hábeas corpus a favor de un denunciado por el delito de robo y se encontraba en poder de las rondas campesinas. Mientras, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Pedro Germán Lizana, lamentó la agresión y rechazó la conducta de los ronderos, el presidente del Poder Judicial, Duberli Rodríguez, al enterarse de la agresión que recibió la jueza, afirmó que las rondas campesinas están facultadas para actuar en el ámbito de su jurisdicción <sup>62</sup>

Resulta retórico el argumento del doctor Rodríguez Tineo; sin embargo, en la práctica, los jueces, fiscales y otros operadores de la justicia ordinaria son objeto de permanente amenaza o coacción cuando tienen a su cargo procesos penales en contra de los miembros de las rondas campesinas.

En este orden de ideas, el ex presidente del Poder Judicial, debería preguntarse si la justicia ordinaria tiene razón de ser en el territorio donde operan las rondas campesinas. ¿Vale la pena poner en riesgo a los jueces y otros operadores de la justicia ordinaria dentro de la jurisdicción de las rondas campesinas? ¿No sería mejor delimitar la competencia material de cada una de las jurisdicciones a fin de evitar situaciones controvertidas entre ronderos y operadores de la justicia ordinaria?

---

<sup>62</sup> LEGIS.PE - JULIO 6, 2017



El desconocimiento de la realidad social y cultural por parte de los jueces que aprobaron la jurisdicción especial a favor de las rondas campesinas, conlleva a que las dos jurisdicciones: la especial de las rondas y la ordinaria o estatal, administren justicia paralelamente en el mismo ámbito territorial, generando controversia respecto a la competencia y la autonomía jurisdiccional dispuesta en el art. 139° inciso 1) de la constitución política, donde expresamente se dispone que no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna, independiente, con excepción de la militar y la arbitral.

### **Resultado No. 2:**

La percepción de la sociedad sobre el accionar de las rondas campesinas es diferente entre los que integran las rondas y los ciudadanos que no están dentro de la organización rondera.

El 74.7%, de los miembros de las rondas campesinas afirma que la justicia ordinaria no reconoce el trabajo de la organización de rondas y, esa es la principal causa que genera situaciones controvertidas entre las rondas campesinas y la justicia ordinaria.

Por su lado, el 73.7% de los encuestados que no tienen participación directa en la organización de ronda campesinas, afirma que las situaciones conflictivas se genera debido a

La Sala Superior de Apelaciones de la provincia de Chota<sup>63</sup>, ha determinado que las rondas campesinas contravienen el ordenamiento jurídico vigente, evidenciándose su arbitrariedad pues en mérito al artículo 1° de la Ley No. 27908-Ley de rondas campesinas, este colectivo organizado de personas tiene como función colaborar en la solución de conflictos a través del mecanismo conciliatorio (extrajudicial). Ello, sin embargo, para concretarse exige el advenimiento voluntario de las partes en conflicto, no la imposición ni el activismo decisorio de las rondas campesinas. Esa ineludible exigencia en modo alguno se ve reflejada en el

---

<sup>63</sup> Exp. 142-2015 – Sala superior de apelaciones Chota

contenido del acta de fecha 26 de setiembre del 2013, haciendo patente más bien un proceder que desborda la facultad conferida por la Ley de Rondas Campesinas y además desnaturaliza la función que éstas cumplen<sup>64</sup>. En este caso analizado, la Sala Superior de Chota confirmó una sentencia por el delito contra el patrimonio en su modalidad de usurpación agravada, cuyo sentenciado resultó el presidente de rondas del distrito de Cochabamba – provincia de Chota. La Sala Superior fundamenta su decisión en el sentido que la función de las rondas campesinas es sólo conciliadora, afirmando que la organización rondera estaría invadiendo la competencia de la jurisdicción ordinaria; agrega que el personal de las rondas campesinas no está capacitado para administrar justicia.

En el caso referido se evidencia que la Sala Superior reconoce la función de las rondas como conciliadora y expresa su malestar porque la organización rondera estaría invadiendo la competencia de la jurisdicción ordinaria y agrega que el personal de las rondas campesinas no está capacitado para administrar justicia. La controvertida posición de la justicia ordinaria no es aceptada por las rondas campesinas. Éstas aseguran que, tanto la constitución política, como la ley de rondas campesinas y el acuerdo plenario 1-2009, las otorgan facultades jurisdiccionales para resolver todos los casos y todas las materias: homicidios, feminicidios, robos, violación sexual y otros, sin limitación alguna.

El diario La República<sup>65</sup>, informó que la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Chota, realizó una movilización contra el Poder Judicial, por haber sentenciado a dos de sus principales dirigentes, entre ellos al ex presidente provincial de rondas campesinas de apellido Campos Rafael, sentenciado a diez años de pena privativa de la libertad, por el delito contra la libertad, en su modalidad de secuestro, en agravio del señor de apellido López Delgado. La nota periodística aludía al hecho ocurrido el año 2016 cuando el dirigente provincial de las

---

<sup>64</sup> Sentencia de vista: Exp. 142-2015 – Sala superior de apelaciones Chota

<sup>65</sup> Diario La República 02/01/17.

rondas campesinas, de ese entonces, en su afán de hacerse justicia ante la muerte de su hijo, organizó un grupo de ronderos e incursionó violentamente en un local nocturno donde habrían libado licor los presuntos autores del asesinato. Al tomar por la fuerza el local nocturno, el dirigente rondero y sus acompañantes sacaron los bienes muebles del referido local, objetos que fueron quemados en la vía pública, seguidamente retuvieron por la fuerza a supuesto sospechoso de la muerte del hijo de dirigente rondero y lo trasladaron a la zona rural para que declare respecto a las circunstancias en que habrían dado muerte al hijo del dirigente. El hecho violento protagonizado por las rondas campesinas fue denunciado ante el Ministerio Público y tras las investigaciones se formuló acusación por los delitos de daños y secuestro, proceso que en primera instancia concluyó con sentencia condenatoria de 10 años de pena privativa de la libertad y 10,000 soles como concepto de reparación civil contra el presidente provincial de rondas campesinas.

Del análisis del caso judicial quedó acreditado que el dirigente rondero se hizo justicia por su propia mano frente a la muerte de su hijo; sin embargo, los magistrados de la Sala Superior Mixta de Chota se vieron amenazados y por tanto obligados a absolver de la acusación fiscal al presidente provincial de rondas y otros acusados. Los magistrados del Judicial no lo expresan públicamente, pero siempre se encuentran bajo amenaza y manifiesta presión social que implantan las rondas campesinas a través de movilizaciones, pronunciamientos públicos como es que hizo y protestas la facción de la Central Única Provincial de las rondas campesinas<sup>66</sup>.

El Estado como único titular de la jurisdicción, también ha delegado la función jurisdiccional a favor de las rondas campesinas; sin embargo, no se les ha asignado competencias, lo cual lleva a confusión y por eso es que se vienen involucrando en conocer y/o someter a su jurisdicción casos que son de competencia exclusiva del Poder Judicial o del

---

<sup>66</sup> Radio Siglo 21-Chota. 03-01-17

Ministerio Público; por lo que, se le debe, mediante ley establecer concretamente qué casos deben ser sometidos a su conocimiento y jurisdicción, lo que conllevará a evitar conflictos entre la jurisdicción ordinaria y las rondas campesinas. (Mozo, 2015, p. 27)

Se advierte que las rondas campesinas administran justicia en las materias penal, civil, familia, faltas, etc. En ese orden de ideas, llama la atención que los legisladores e investigadores del tema no se hayan preguntado: *¿qué casos o materias quedan para ser resueltos en la jurisdicción ordinaria?* Otra pregunta válida: *¿Podrán operar dos jurisdicciones en el mismo ámbito geográfico, sin que se interfieran en el ejercicio de sus facultades jurisdiccionales?*

Si bien, un bajo porcentaje de encuestados, miembros de las rondas campesinas, reconoce que los excesos cometidos dentro de su organización generan conflictos con la justicia ordinaria, también es cierto que, los excesos sí motivan el inicio de procesos penales en contra los miembros de las rondas campesinas. Este hecho ocurre en diferentes localidades donde operan las rondas campesinas. En la provincia de Bongará –Amazonas, el 40% de encuestados han admitido que las rondas campesinas administran justicia sin tomar en cuenta la normatividad, es por ello que existen denuncias penales contra los sus dirigentes (Pereyra 2015).

El diario La República<sup>67</sup> presentó el titular: *Condenan a 30 años de cárcel a dirigente de Rondas Campesinas*. La nota informativa refería la sentencia emitida contra el presidente provincial de rondas campesinas, procesado y sentenciado por el delito de secuestro en agravio de dos ciudadanos del centro poblado de La Púcara, distrito de Tacabamba, provincia de Chota. El fiscal a cargo del caso, No. 2014–97- acuso por el delito de secuestro y lesiones solicitando 30 años de cárcel para el rondero acusado, por cuanto, en su calidad de Presidente de la Central Única de Rondas Campesinas de Chota, a través de su organización, secuestró por el lapso de

---

<sup>67</sup> Diario la República, 07 de junio del año 2017

15 días a dos ciudadanos, a quienes se les propinó castigos degradantes, torturas, lo han golpeado, lo han colgado de los testículos, todo ello bajo la orden del acusado, con el objetivo de esclarecer la muerte de una mujer en el centro poblado de La Púcara, distrito de Tacabamba.

En el mes de mayo de 2014 sorprendió a la población del ámbito regional la noticia que daba cuenta de la sentencia penal recaída contra el presidente provincial de rondas campesinas de la provincia de Chota. Uno de los titulares periodísticos decía: Condenan a 35 años de cárcel a ronderos asesinos de esposos Collantes Vizconde<sup>68</sup>

El informe periodístico daba cuenta que el sentenciado, presidente de la Central Provincial de rondas campesinas de Chota, quien en común acuerdo con otros dirigentes habría recibido dinero para contratar a un grupo de ronderos y trasladarlos desde la provincia de Chota hasta el centro poblado de Yanacancha distrito de La Encañada, provincia de Cajamarca, donde tenían como objetivo desalojar a la familia Collantes Vizconde. El contrato y respectivo pago fue realizado por la también sentenciada de apellido Rojas, quien se sentía con derecho a posesionar la hacienda Yanacancha y no la podía posesionar, debido a la resistencia y férrea oposición que ostentaban los esposos Collantes Vizconde.

En la sentencia se precisa que, el día 04 de enero de 2012, los ronderos viajaron desde Chota hasta Yanacancha. Esa noche fueron atendidos con comida licor por parte de la persona que los contrató para “el desalojo”. Cuando era las 05 de la mañana aproximadamente del día 05 de enero incursionaron al inmueble objeto de desalojo. Encontraron a los dos esposos, aun descansando, como de costumbre se atrincheraron y dispararon con sus armas de largo alcance contra los miembros de las rondas campesinas. Ante la resistencia que ejerció la pareja de esposos, los ronderos dispararon a quemarropa, teniendo como primera víctima a la mujer quien en su propia casa falleció por impacto de arma de fuego. Una vez muerta la mujer, el

---

<sup>68</sup> Diario Panorama Cajamarquino, 23/05/ 2014

esposo se rindió, circunstancias en que fue captado por los ronderos, quienes luego de golpearlo lo llevaron arrastrado un largo tramo por la ruta a Llaucán (provincia de Hualgayoc), donde lo ultimaron con un disparo en la cabeza para luego dejarlo abandonado al cuerpo sin vida.

A decir de la Sala Superior de Apelaciones de Chota, las rondas campesinas contravienen el ordenamiento jurídico vigente, evidenciándose su arbitrariedad pues en mérito al artículo 1° de la Ley No. 27908-Ley de Rondas Campesinas, este colectivo organizado de personas tiene como función colaborar en la solución de conflictos a través del mecanismo conciliatorio (extrajudicial). Ello, sin embargo, para concretarse exige el advenimiento voluntario de las partes en conflicto, no la imposición ni el activismo decisorio de las rondas campesinas. Esa ineludible exigencia en modo alguno se ve reflejada en el contenido del acta de fecha 26 de setiembre del 2013, haciendo patente más bien un proceder que desborda la facultad conferida por la Ley de Rondas Campesinas y además desnaturaliza la función que éstas cumplen, al extremo de invadir competencias que no les corresponde, peor aún que se lo hace con personal que no se encuentra capacitado para el indicado fin<sup>69</sup>.

En el caso referido se evidencia que la Sala Superior reconoce la función de las rondas como conciliadora, expresa su malestar porque la organización rondera estaría invadiendo la competencia de la jurisdicción ordinaria y agrega que el personal de las rondas campesinas no está capacitado para administrar justicia; sin embargo, esta posición de la justicia ordinaria no es aceptada por las rondas campesinas; éstas, alegan que conforme a la constitución y al acuerdo plenario 1-2009 tienen facultades jurisdiccionales sin limitación alguna y es por ello que se abocan a resolver todo tipo de problemas, incluyendo delitos graves como, homicidios, feminicidios, robos, violación sexual de menores y otros.

---

<sup>69</sup> Sentencia de vista: Exp. 142-2015 – Sala superior de apelaciones Chota

En el expediente No. 42-2009, sustanciado en la sala superior Mixta de Chota se procesó, acusó y sentenció a tres personas, imputadas por el delito de homicidio calificado, cuyo cuerpo del agraviado fue encontrado abandonado por las rondas campesinas en un camino del distrito de Chugur, provincia de Hualgayoc Cajamarca.

Según la hipótesis de los ronderos, estas tres personas, eran las únicas sospechosas del asesinato del agraviado. Luego de la cadena ronderil y el castigo físico aplicado por las rondas campesinas, los detenidos confesaron que uno de ellos era el autor del homicidio y, en consecuencia, los “convictos y confesos”, fueron entregados a la Policía Nacional para ser procesados en la jurisdicción ordinaria. Como era de esperarse, los confesos ante las rondas, en la jurisdicción ordinaria negaron su participación y, conforme al principio de la presunción de inocencia, fueron dejados en libertad. Una vez que los ronderos conocieron la libertad de los inculcados, expresaron su descontento y procedieron a intervenir a los liberados y los volvieron a entregar ante el Ministerio Público, exigiendo que se haga efectiva la prisión, bajo la amenaza de tomar el local del Ministerio Público, con lo cual lograron su objetivo. No obstante, la imputación era deficiente; sin embargo, los implicados fueron acusados el Ministerio Público y luego sentenciados, por el delito de homicidio calificado, a dos de ellos se les impuso 30 años de pena privativa de la libertad y a uno de los mismos 25 años de condena, más 20, 000 soles de reparación civil. En la sentencia emitida por la Sala Superior Mixta de Chota se valoró las actas y declaraciones realizadas por las rondas campesinas, teniendo como única presunción el litigio de terrenos. Si bien los sentenciados interpusieron recurso de nulidad ante la Corte Suprema, se dio el caso que la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema<sup>70</sup> confirmó la sentencia de primera instancia, alegando que los sentenciados no han podido probar que fueron torturados para declarar a nivel de las rondas campesinas. En el presente caso se advierte una deficiente defensa técnica, la misma que no pudo sustentar el indebido proceso y

---

<sup>70</sup> R.N. No. 3245-2010- Cajamarca

afectación al derecho de defensa durante las diligencias de investigación, más aún si la insuficiencia probatoria era evidente.

Chillihuani (2012) concluye que, la coexistencia de dos sistemas de justicia implica que los jueces de paz actualmente suelen solicitar a las rondas campesinas que aplique disciplina a tal o cual delincuente que ellos han juzgado. Así, la ronda campesina sería ejecutor de las sanciones acordadas por el sistema formal de justicia. De esta manera el juez de paz habría buscado complementar su trabajo con las rondas, permitiendo que estas apliquen sanciones y realicen investigaciones, reservándose para sí la tarea de decidir los procesos judiciales.

El acuerdo plenario No. 1-2009, del 13 de noviembre del año 2009, estableció que las rondas campesinas administran justicia en el ámbito de su jurisdicción. No obstante, las facultades jurisdiccionales otorgadas por el pleno, este acuerdo no precisa los límites de competencia, entendiéndose que queda a libre disposición de los ronderos, vacío legal que en la práctica genera conflictos con la justicia ordinaria.

En el acuerdo (f-9), se ha determinado que ante una imputación penal contra los integrantes de rondas campesinas por la presunta comisión de un hecho punible debe analizarse si resulta de aplicación el artículo 149° de la Constitución, es decir, si es de aplicación el denominado fuero especial comunal, en tanto en cuanto el reconocimiento de una jurisdicción especial constituye un límite objetivo a la jurisdicción penal ordinaria. Se agrega que se debe identificar los elementos: humano, orgánico, normativo y el elemento geográfico.

De conformidad al Competencia judicial artículo V del título preliminar del código procesal penal vigente **(1)** Corresponde al órgano jurisdiccional la dirección de la etapa intermedia y, especialmente, el juzgamiento, así como expedir las sentencias y demás resoluciones previstas en la Ley. En el mismo orden de ideas, dispone en forma expresa que **(2)** Nadie puede ser sometido a pena o medida de seguridad, sino por resolución del órgano jurisdiccional



determinado por la Ley. En este extremo se reafirma la exclusividad jurisdiccional dispuesta en el art. 138° de la constitución política del estado; consecuentemente, cabe interrogarse si estas disposiciones son, o no, ¿incompatibles con la jurisdicción especial? ¿Qué coordinación podría haber entre jurisdicción ordinaria y la especial si, tanto en el título preliminar del código procesal penal, como en la constitución política se desconoce la existencia de otra jurisdicción?

El artículo 159° inciso 4) de la constitución política de 1993, dispone que, corresponde al Ministerio Público: conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. En este orden de ideas, el Ministerio Público, tiene como finalidad principal velar por la adecuada administración de justicia en representación de la sociedad.

El numeral 4 del artículo 159° de la constitución política del estado peruano señala que el Ministerio Público conduce desde su inicio la investigación del delito... agrega que la Policía nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. En el artículo 67° del código procesal penal dispone que la Policía Nacional en la función de investigación del delito, deben tomar conocimiento de los delitos por su propia iniciativa, con obligación de dar cuenta inmediata al Ministerio Público.

El artículo 166° de la carta magna dispone que, la Policía Nacional del Perú tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia y controla las fronteras.

Con el acuerdo plenario N0. 1-2009 se autorizó la jurisdicción especial de las rondas campesinas, facultando funciones jurisdiccionales inéditas a sus miembros; sin embargo, del análisis de esta decisión se advierte que, los vocales supremos (hoy jueces) dejaron vacíos y

confusiones sobre la competencia territorial y material de las rondas campesinas, más aún si las aluden en la misma jurisdicción de los indígenas o nativos.

El código procesal penal (artículo 28°), por su lado dispone: (1) Los Juzgados Penales Colegiados, integrados por tres jueces, conocerán materialmente de los delitos que tengan señalados en la Ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayor de seis años. (2) Los Juzgados Penales Unipersonales conocerán materialmente de aquellos cuyo conocimiento no se atribuya a los Juzgados Penales Colegiados. (3) Compete funcionalmente a los Juzgados Penales, Unipersonales o Colegiados, lo siguiente: a) Dirigir la etapa de juzgamiento en los procesos que conforme Ley deban conocer; b) Resolver los incidentes que se promuevan durante el curso del juzgamiento; c) Conocer de los demás casos que este Código y las Leyes determinen. (4) Los Juzgados Penales Colegiados, funcionalmente, también conocerán de las solicitudes sobre refundición o acumulación de penas; (5) Los Juzgados Penales Unipersonales, funcionalmente, también conocerán: a) De los incidentes sobre beneficios penitenciarios, conforme a lo dispuesto en el Código de Ejecución Penal; b) Del recurso de apelación interpuesto contra las sentencias expedidas por el Juez de Paz Letrado; c) Del recurso de queja en los casos previstos por la Ley; d) De la dirimencia de las cuestiones de competencia entre los Jueces de Paz Letrados.

El artículo 139° inciso 3) y siguientes dispones: (3) La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.

El accionar de las rondas urbanas también ha generado titulares en diferentes medios de comunicación masiva, tal es el caso, de la incursión de un grupo de ronderos, encabezado por

Fernando Chuquilín que irrumpió en un club nocturno y azotó a las prostitutas que se encontraban en el local<sup>71</sup>. Según refiere este Diario, el dirigente rondero dijo que así buscaban cuidar los valores de la ciudad. En Cutervo, otro grupo de ronderos atacó con fuetes a un grupo de médicos y enfermeras cuando pasaban momento de esparcimiento en un bar de la ciudad. En La Libertad secuestraron cinco días a una mujer acusada de emplear hechizos; y en Cajamarca castigaron a dirigentes por estar de acuerdo con que el Estado emplee recursos del canon minero.

En muchos casos, lo hacen encapuchados. ¿Por qué imponer la ética y la moral con golpes cuando en las ciudades sí existen comisarías y juzgados? Es lo que critican los antropólogos y lo que ha puesto en alerta al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo<sup>72</sup>.

Si bien los castigos inhumanos como los de sumergir a los investigados en una laguna de agua o hacerlos sentar sobre una petromax al rojo vivo, ya han dejado de ser comunes, como si lo eran en las primeras décadas de actividad ronderil; en algunos casos, los investigados o sus familiares, denuncian que se les inyecta agujas o espinas por las unas, el pene u otras partes sensibles del cuerpo, como se dio el proceso del expediente No. 155-2014- Sala de apelaciones Chota. Hay que tener en cuenta también que muchas veces, las rondas campesinas, en su actuar, esporádicamente cometen ciertos delitos, como tortura, lesiones y abuso de autoridad. (Gallardo, 2012, p. 178-179).

### **Resultado No. 3.**

Los encuestados que no integra la organización de las rondas campesinas percibe que la delimitación de la competencia material de la jurisdicción especial de las rondas evitaría las situaciones conflictivas entre la organización rondera y la justicia ordinaria. El 95.8% de estos

---

<sup>71</sup> El Comercio, 04/07/ 2014

<sup>72</sup> El Comercio, 04/07/ 2014

ciudadanos afirma que la delimitación de competencia evitaría las situaciones conflictivas entre las dos jurisdicciones que operan en la Provincia de Chota. Esta opinión generalizada no es compartida por los miembros de las rondas campesinas que fueron encuestados. Sólo el 11.6% afirma que la delimitación de su competencia material es una medida correctiva para evitar conflictos con la justicia ordinaria.

Cabe recalcar que la hipótesis propuesta ha quedado demostrada. Así se corrobora en la tabla de resultados (95.8 %) obtenidos de la encuesta a los ciudadanos que no participan en forma directa en la organización de las rondas campesinas. A esa proporción mayoritaria se suma el 11.6 % de los ronderos encuestados quienes también ven como alternativa la delimitación de su competencia.

Al delimitar la competencia de las rondas campesinas se podría predecir las decisiones de las rondas campesinas; por ende, la sociedad conocería con precisión las facultades jurisdiccionales y la competencia material de las rondas campesinas; condición que conlleva a no atentar contra la autonomía de la jurisdicción ordinaria y viceversa.

Cabe resaltar que, el artículo 18º, inciso 3) del Código procesal Penal dispone que el Poder Judicial no podrá abocarse a los casos que refiere el art. 149º de la constitución política del Estado; es decir sobre casos resueltos en la jurisdicción especial de las comunidades indígenas. Al ser así, esta disposición procesal genera confusión al momento de interpretar el principio de exclusividad jurisdiccional garantizado en el art. 139º de la misma carta magna.

Ardito Vega<sup>73</sup>, al analizar el artículo 18º inciso 3) de CPP, concluye que una errónea interpretación de este artículo podría generar la existencia de dos tipos de justicia: la estatal, dirigida a los sectores altos y medios, con valor oficial y con recursos estatales; y otra de

---

<sup>73</sup> Comentario al artículo 18, inciso 3, del Código Procesal Penal: riesgos y posibilidades.

segundo nivel, dirigida a los más pobres y en la que ni siquiera estarían garantizados sus derechos fundamentales o la segunda instancia. Asegura que no es admisible delegar la administración de justicia por parte de las comunidades campesinas y nativas y de las rondas campesinas ni asumir que el Estado debe abstenerse de intervenir en todos los conflictos que se suscitan entre comuneros, por cuanto no están en la capacidad de enfrentar problemas como homicidio o narcotráfico ni fueron creados con esta intención.

Por su lado, el inciso 4) del artículo 159° de la constitución política del estado peruano señala que el Ministerio Público conduce desde su inicio la investigación del delito... agrega que la Policía nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. En el artículo 67° del código procesal penal dispone que la Policía Nacional en la función de investigación del delito, deben tomar conocimiento de los delitos por su propia iniciativa, con obligación de dar cuenta inmediata al Ministerio Público.

La constitución política de 1993, en su artículo 149° establece que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario...

Si bien, el artículo 149° de la constitución política reconoce el derecho consuetudinario de las comunidades indígenas las mismas que deberían resolver sus conflictos con el apoyo de las rondas campesinas, no se ha tenido en cuenta que las rondas campesinas no tienen la condición social y/o cultural de las comunidades indígenas, puesto que éstas habitan en lugares periféricos a la ciudad y consecuentemente tienen los mismos usos y costumbres de los operadores de la justicia ordinaria.

Cabe recalcar que, el artículo 149° resulta controvertido a la luz del artículo 138°, el cual señala que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial;

a la vez, colisiona con el artículo 139° inciso 1) que dispone taxativamente el principio de unidad y exclusividad de la función jurisdiccional con la excepción de la jurisdicción militar y arbitral. La norma constitucional no hace referencia a la jurisdicción comunal como una excepción a este principio.

El artículo 1° inciso 1) de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que los Estados Parte están obligados a respetar los derechos reconocidos en la Convención y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social; sin embargo, al delegar la justicia especial a las rondas campesinas sin previa delimitación significa que se está discriminando a un sector del estado, pues queda demostrado que la justicia del estado sería sólo para algún grupo allegado al estado o gobierno de turno, mientras que para el sector rural o comunal se le ofrece una justicia con castigo físico y otros mecanismos consuetudinarios. En el mismo orden de ideas, la Convención Americana reconoce en su artículo 24° el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, siendo ello así, resulta paradójico que exista una justicia para la zona urbana y otra para la zona rural.

Wilfredo Ardito, en su análisis del artículo 18° del CPP, afirma que el Poder Judicial y el Ministerio Público mantienen su obligación de proteger los intereses de los ciudadanos que habitan en las zonas rurales, especialmente sus derechos humanos. La existencia de los mecanismos comunitarios no puede interpretarse en el sentido de que el Derecho estatal, y menos aún los derechos humanos, carecen de vigencia en esos lugares. Agrega que estos mecanismos no deben ser percibidos por la justicia penal estatal como instrumentos para reducir su carga procesal, aunque efectivamente contribuyen a ello, sino como formas para materializar el derecho de los ciudadanos a obtener justicia de manera rápida y eficaz para aquellas situaciones que el Estado no puede atender de manera efectiva.

Por su lado, la Sala Superior Mixta de Chota<sup>74</sup> ha determinado que las rondas campesinas contravienen el ordenamiento jurídico vigente, evidenciándose su arbitrariedad pues en mérito al artículo 1° de la Ley No. 27908-Ley de rondas campesinas, este colectivo organizado de personas tiene como función colaborar en la solución de conflictos a través del mecanismo conciliatorio (extrajudicial). En ese orden de ideas, la Sala Superior, reconoce la función de las rondas como conciliadora y expresa su malestar porque la organización rondera estaría invadiendo la competencia de la jurisdicción ordinaria y agrega que el personal de las rondas campesinas no está capacitado para administrar justicia. Esta posición de la justicia ordinaria no es aceptada por las rondas campesinas; éstas, alegan que conforme a la constitución y al acuerdo plenario 1-2009 tienen facultades jurisdiccionales sin limitación alguna y se abocan a resolver todo tipo de problemas, incluyendo delitos graves como, homicidios, feminicidios, robos, violación sexual de menores y otros.

---

<sup>74</sup> Sentencia de vista: Exp. 142-2015 – Sala superior de apelaciones Chota.

## **CONCLUSIONES**

**1.-** La jurisdicción especial de las rondas campesinas resuelve casos penales, civiles, familia, faltas y otros. Las rondas campesinas actúan sin límite, incluso respecto a casos que se encuentran como cosa juzgada, ante la justicia ordinaria, situación que genera controversia entre la jurisdicción especial y la estatal.

**2.-** La jurisdicción especial de las rondas campesinas opera en forma paralela a la justicia ordinaria; en consecuencia, viene generando controvertidas situaciones con los operadores de la justicia estatal (jueces, fiscales, PNP), ello se corrobora al examinar las sentencias judiciales, cuyos procesados son los miembros de las rondas campesinas.

**3.-** La falta de delimitación de la competencia material de la jurisdicción especial de las rondas campesinas es la principal causa que genera situaciones conflictivas entre las rondas campesinas y la justicia ordinaria o estatal en Chota.

**4.-** Si se delimita la competencia material de la jurisdicción especial de las rondas campesinas se evitará las situaciones conflictivas entre la jurisdicción especial y la ordinaria.

**5.-** Los jueces supremos y/o doctrinarios que aprobaron el acuerdo plenario 1-2009 consideraron erróneamente a las rondas campesinas dentro de la misma jurisdicción especial



de las comunidades indígenas. Desde sus lejanos escritorios no pudieron advertir que las rondas campesinas operan en la periferia de la ciudad, cuyos usos y costumbres han dejado de ser indígenas o nativos.

## **RECOMENDACIONES**

**1.-** Se recomienda a los legisladores que delimiten la competencia material de la jurisdicción especial de las rondas campesinas, ello teniendo en consideración que la organización rondera opera en la periferia de la ciudad, paralelamente a la justicia ordinaria.

**2.-** Se recomienda a los legisladores que reformen el artículo 149° de la constitución política del Estado peruano, especificando los alcances de la jurisdicción especial de las rondas campesinas y, separadamente de las comunidades indígenas o nativas.

**3.-** Se recomienda a los legisladores que reformen el artículo 139°, inciso 1) de la Constitución Política del Estado peruano, por cuanto dispone la exclusividad jurisdiccional, disposición que colisiona con el artículo 149° de la misma carta magna, que reconoce facultades jurisdiccionales a las comunidades indígenas y/o rondas campesinas, jurisdicción reconocida expresamente por el acuerdo plenario 1-2009 y la ley de rondas campesinas.

**4.-** Se recomienda a los jueces supremos y/o doctrinarios que reexaminen el acuerdo plenario 1-2009 y, con mejor criterio, especifiquen los alcances de la jurisdicción especial de las rondas campesinas, con expresa diferenciación de las comunidades indígenas y/o nativas, por cuanto -en el referido plenario- se evidencia una inadecuada unificación jurisdiccional.

## **BIBLIOGRAFIA**

ARDITO Vega W. 2010. Derecho PUCP No. 65: “El artículo 18, inciso 3, del Código Procesal Penal: riesgos y posibilidades” - PERU.

BAZÁN, Fernando. 2008. La otra Justicia. Cajamarca. Perú.

BERRIOS Alarcón, Jorge. 1985. Monografía Histórica de Chota. Lima. Perú.

CHILLIHUANI, V. 2012. Las rondas campesinas del Perú una alternativa de justicia en las zonas rurales alto andinas, el caso de Ocongote un distrito rural del departamento del cusco 1992-2011. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima.

EL COMERCIO (diario), <https://elcomercio.pe/>, visitado el 29/06/2018 – Perú

GALLARDO, Hermitanio 2012. Justicia ronderil: análisis jurídico a su normatividad legal e intervención en la solución de problemas penales en el distrito de Chota, 2005-2009. Universidad nacional de Cajamarca. - Perú.

GARCILASO 1945. Comentarios reales de los incas Libro V, Cap. IV. Emece Editores S.A., Buenos Aires - Argentina.

HERNANDEZ Canelo, Rafael. 2013. Historia de Derecho Peruano. Lima -Perú.

HUANCA Pacheco Antonio. 2012. Funciones y atribuciones del Ministerio Público – Perú.

HURTADO, A 2008. Programa de educación en derechos humanos y desarrollo organizacional para las rondas campesinas de Cutervo- Cajamarca. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Lambayeque-Perú.

IDROGO, Daniel (2008). El reconocimiento estatal de las rondas campesinas y el conflicto con el poder Judicial. Universidad Cesar Vallejo. Trujillo -Perú.

LA REPUBLICA (diario), <https://larepublica.pe/>, visitado 10/12/2017 – Perú

LEGIS.PE (revista) Fundador: Roger Vilca: <https://legis.pe/>; visitado 15/06/2018.

PANORAMA CAJAMARQUINO (diario), <https://www.panoramacajamarquino.com/>; visitado: 16/7/2018. Cajamarca – Perú

PEREYRA, Zarela. 2014. Administración de justicia de las rondas campesinas en la provincia de Bongará- Amazonas. Lambayeque.

PROJUR 2008. Programa de acceso a la justicia en comunidades rurales- noviembre -Perú.

ROMERO Arteaga, M.S. 2015. Las Rondas Urbanas de Cajamarca. Derecho y cambio social. [http://www.derechoycambiosocial.com/revista042/las\\_rondas\\_urbanas\\_de\\_cajamarca.pdf](http://www.derechoycambiosocial.com/revista042/las_rondas_urbanas_de_cajamarca.pdf) . Visitado 12/05/2018

RUIZ Molleda, Juan Carlos 2008, ¿Por qué deben reconocerse facultades jurisdiccionales a las Rondas Campesinas?, IDL, Lima - Perú.

SÁNCHEZ, Oscar 2015. Así nació la ronda. Chota – Perú.

SÁNCHEZ, Oscar 2005. El azúcar que en Chota no fue dulce. 2005. Chota- Perú.

SÁNCHEZ, Oscar 2007. Movimientos sociales y políticos en la sierra central de Cajamarca. Santa Cruz-Cajamarca-Perú.

SÁNCHEZ, Willam. Programa la voz del rondero- Siglo 21. 2018. Chota-Perú.

SISNIEGUEZ BURGA, Lucero Del Rocío 2015. Análisis de la teoría del delito en los casos donde intervienen las rondas campesinas.

SOLÍS, A 2001. Metodología de la investigación jurídico social, 2da. Edición. Lima Fecat.

YRIGOYEN, Raquel 2002. Rondas campesinas y pluralismo legal: necesidad de reconocimiento constitucional y desarrollo legislativo. Artículo publicado en: Defensoría del pueblo, Lima - Perú.